



BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE ADMINISTRACION AMBIENTAL DE EUSKADI

Participación Pública

21 de mayo de 2018





Indice

EXPOSICION DE MOTIVOS.....	7
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES	15
ARTÍCULO 1. OBJETO.....	15
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.....	16
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS.....	19
ARTÍCULO 4. UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.....	19
ARTÍCULO 5. DERECHOS DE LAS PERSONAS.....	20
ARTÍCULO 6. DEBERES DE LAS PERSONAS.....	20
TÍTULO SEGUNDO. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL.....	21
ARTÍCULO 7. COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.....	21
ARTÍCULO 8. EJERCICIO DE COMPETENCIAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	22
ARTÍCULO 9. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.....	22
ARTÍCULO 10. CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE.....	23
ARTÍCULO 11. COMPOSICIÓN.....	24
TÍTULO TERCERO. INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL.....	24
ARTÍCULO 12. INFORMACIÓN AMBIENTAL.....	24
ARTÍCULO 13. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL.....	25
ARTÍCULO 14. SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.....	26
ARTÍCULO 15. PARTICIPACIÓN AMBIENTAL.....	26
ARTÍCULO 16. ACCIÓN PÚBLICA.....	27
ARTÍCULO 17. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.....	27
TÍTULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE.....	28
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.....	28
ARTÍCULO 18. RÉGIMENES DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL.....	28
ARTÍCULO 19. PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS.....	29
ARTÍCULO 20. FINALIDADES.....	29
ARTÍCULO 21. CONSULTAS PREVIAS.....	30
ARTÍCULO 22. CONCURRENCIA DE LOS RÉGIMENES DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL CON LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.....	30
ARTÍCULO 23. OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	31
ARTÍCULO 24. OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES.....	32
ARTÍCULO 25. CAPACIDAD TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD.....	33
ARTÍCULO 26. CONFIDENCIALIDAD.....	33
ARTÍCULO 27. TRANSMISIÓN DE LAS ACTIVIDADES O INSTALACIONES.....	34
ARTÍCULO 28. CESE DE LA ACTIVIDAD Y CIERRE DE LA INSTALACIÓN.....	34
ARTÍCULO 29. MODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES.....	34
CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES AMBIENTALES.....	36
ARTÍCULO 30. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.....	36
ARTÍCULO 31. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.....	37
CAPÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.....	37
ARTÍCULO 32. INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO.....	38
ARTÍCULO 33. CONTENIDO DE LA SOLICITUD.....	38
ARTÍCULO 34. SUBSANACIÓN.....	40
ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN PÚBLICA.....	40
ARTÍCULO 36. INFORME MUNICIPAL EN ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.....	41
ARTÍCULO 37. INFORME DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE VERTIDOS.....	41
ARTÍCULO 38. OTROS INFORMES.....	42
ARTÍCULO 39. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y AUDIENCIA DEL INTERESADO.....	42
ARTÍCULO 40. RESOLUCIÓN.....	43



ARTÍCULO 41. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES.	43
ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.	44
ARTÍCULO 43. VIGENCIA Y REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES.	46
ARTÍCULO 44. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS.	47
ARTÍCULO 45. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES ÚNICAS.	48
ARTÍCULO 46. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES ÚNICAS.	50
ARTÍCULO 47. COMUNICACIÓN DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO O APERTURA.	50
CAPÍTULO IV. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA	51
ARTÍCULO 48. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	51
ARTÍCULO 49. SOLICITUD DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	51
ARTÍCULO 50. INFORMACIÓN PÚBLICA Y EMISIÓN DE INFORMES.	52
ARTÍCULO 51. INFORME DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.	52
ARTÍCULO 52. CONCESIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD.	53
ARTÍCULO 53. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDAD CLASIFICADA O APERTURA.	54
ARTÍCULO 54. REVISIÓN DE LA LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	54
CAPÍTULO V. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA	55
ARTÍCULO 55. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	55
ARTÍCULO 56. PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	55
ARTÍCULO 57. CONTENIDO Y EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	56
ARTÍCULO 58. MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	56
TÍTULO QUINTO EVALUACIÓN AMBIENTAL	57
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	57
ARTÍCULO 59. EVALUACIÓN AMBIENTAL.	57
ARTÍCULO 60. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	58
ARTÍCULO 61. COMPETENCIAS.	58
ARTÍCULO 62. NULIDAD DE PLANES Y PROYECTOS NO EVALUADOS.	59
ARTÍCULO 63. CAPACIDAD TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD.	59
ARTÍCULO 64. CONFIDENCIALIDAD.	60
ARTÍCULO 65. PLANES Y PROGRAMAS EXCLUIDOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	60
ARTÍCULO 66. PROYECTOS EXCEPTUABLES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	61
ARTÍCULO 67. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LAS EVALUACIONES AMBIENTALES ORDINARIAS.	61
ARTÍCULO 68. PUBLICIDAD.	62
ARTÍCULO 69. RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.	62
ARTÍCULO 70. RELACIONES INTERCOMUNITARIAS Y TRANSFRONTERIZAS.	63
ARTÍCULO 71. REGISTRO DE PERSONAS INTERESADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.	63
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS	64
ARTÍCULO 72. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.	64
ARTÍCULO 73. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.	64
ARTÍCULO 74. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO.	65
CAPÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS	65
ARTÍCULO 75. NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.	65
ARTÍCULO 76. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.	66
TÍTULO SEXTO. INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL	67
ARTÍCULO 77. ACUERDOS MEDIOAMBIENTALES.	67
ARTÍCULO 78. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES (EMAS).	67
ARTÍCULO 79. FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA.	68
ARTÍCULO 80. HUELLA AMBIENTAL.	69
ARTÍCULO 81. COMPRA PÚBLICA VERDE.	69
ARTÍCULO 82. ECOINNOVACIÓN.	70
ARTÍCULO 83. FISCALIDAD AMBIENTAL.	70



ARTÍCULO 84. INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.....	71
ARTÍCULO 85. VOLUNTARIADO AMBIENTAL.....	71
ARTÍCULO 86. MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO.....	73
TÍTULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.....	73
CAPÍTULO I. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL.....	73
ARTÍCULO 87. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL.....	73
CAPÍTULO II. INSPECCIÓN AMBIENTAL.....	74
ARTÍCULO 88. FINALIDAD DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL Y COMPETENCIAS INSPECTORAS.....	74
ARTÍCULO 89. PERSONAL DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.....	74
ARTÍCULO 90. INFORME Y ACTA DE INSPECCIÓN.....	75
ARTÍCULO 91. DEBER DE SOMETIMIENTO A LA ACTUACIÓN INSPECTORA.....	76
ARTÍCULO 92. PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL.....	76
ARTÍCULO 93. PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN AMBIENTAL.....	77
TÍTULO OCTAVO. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES.....	77
CAPÍTULO I. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL.....	77
ARTÍCULO 94. LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SIN AUTORIZACIÓN, LICENCIA O COMUNICACIÓN PREVIA.....	77
ARTÍCULO 95. MEDIDAS CORRECTORAS.....	78
ARTÍCULO 96. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.....	78
ARTÍCULO 97. PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL.....	79
ARTÍCULO 98. EJECUCIÓN FORZOSA DE LAS MEDIDAS DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL.....	80
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.....	80
ARTÍCULO 99. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y DE SU AMENAZA INMINENTE.....	80
ARTÍCULO 100. RÉGIMEN COMPETENCIAL.....	81
TÍTULO NOVENO. DISCIPLINA AMBIENTAL.....	82
ARTÍCULO 101. INFRACCIONES Y SANCIONES.....	82
ARTÍCULO 102. TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES.....	82
ARTÍCULO 103. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES.....	83
ARTÍCULO 104. SANCIONES.....	83
ARTÍCULO 105. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.....	85
ARTÍCULO 106. DECOMISO.....	85
ARTÍCULO 107. PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES.....	86
ARTÍCULO 108. COMPETENCIAS.....	86
ARTÍCULO 109. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.....	86
ARTÍCULO 110. OBLIGACIÓN DE REPONER E INDEMNIZACIÓN.....	87
ARTÍCULO 111. MULTAS COERCITIVAS Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.....	87
ARTÍCULO 112. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.....	88
ARTÍCULO 113. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.....	88
ARTÍCULO 114. PUBLICIDAD.....	89
ARTÍCULO 115. PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA.....	89
ARTÍCULO 116. DESTINO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS.....	90
DISPOSICIÓN ADICIONAL.....	90
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.....	90
PROCEDIMIENTOS EN CURSO.....	90
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.....	91
INSTALACIONES EXISTENTES.....	91
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.....	92
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.....	92
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7.C) 6. DE LA LEY 27/1983, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMAS Y LOS ÓRGANOS FORALES.....	92
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.....	ERROREA! LASTER-MARKA DEFINITU GABE.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.....	92
ADECUACIÓN AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO.....	102
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.....	103
ADECUACIÓN AL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN LA LEY 1/2006, DE 23 DE JUNIO, DE AGUAS.....	103
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.....	103



MODIFICACIÓN DE ANEXOS.	103
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.	103
ENTRADA EN VIGOR.	103
ANEXOS	103
ANEXO I.A INSTALACIONES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.	103
ANEXO.I.B. INSTALACIONES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.	112
ANEXO.I.C. ACTIVIDADES E INSTALACIONES SOMETIDAS A LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	113
ANEXO. I.D. INSTALACIONES Y ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.	115
ANEXO.II.A. PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA.	117
ANEXO. II.B. PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. .	118
ANEXO. II.C. PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA.	119
ANEXO. II.E. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁNDO UN PROYECTO SOMETIDO A EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEBE SOMETERSE A EVALUACIÓN ORDINARIA.	139



EXPOSICION DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco supuso el establecimiento de un marco normativo unificado para el ejercicio de la política ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Ley, pionera en su momento, estableció los pilares básicos de la política ambiental de la CAPV en sus distintos ámbitos tales como la evaluación ambiental, la gestión de residuos y el control de la contaminación, entre otros.

Una de las señas de identidad de la normativa ambiental en los últimos años ha sido la profusión de normas promulgadas desde distintos ámbitos y niveles, adaptándose, de esta forma, a las necesidades emergentes que la propia sociedad demanda.

Habida cuenta de lo expuesto, esta Ley pretende establecer un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente adaptado a la realidad económica y social vasca actual. Es por ello que la norma incorpora los últimos desarrollos normativos y aporta nuevas técnicas de intervención administrativa en aras a la simplificación y agilización del procedimiento administrativo y con el objetivo de lograr una efectiva protección del medio ambiente compatibilizando las distintas actividades económicas con el entorno en el que se desarrollan.

La presente Ley determina los derechos y los deberes de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, subrayando el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, toda vez que promueve una economía sostenible mediante la gestión eficiente de los recursos naturales, en aras al fomento de una sociedad hipocarbónica que limite la influencia del cambio climático. Alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten con una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica y máxima eficacia.

Con este anhelo la Ley persigue impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente, ya que la búsqueda de soluciones a los retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad vasca requiere, de forma ineludible, la ejecución de actuaciones conjuntas entre las Administraciones Públicas, el sector económico y la ciudadanía en general, habida cuenta de los objetivos comunes perseguidos, como una oportunidad para lograr la mejora de la calidad de vida y el bienestar general, pretendiendo un decidido cambio de modelo de producción y consumo que sitúe a la CAPV como referente a nivel europeo.

Algunas de estas oportunidades se refieren a la innovación, la ecoeficiencia o la compra pública verde; actuaciones basadas, indefectiblemente, en la mejora continua y el diálogo con los agentes socioeconómicos, el derecho a la información



y el desarrollo de un sistema fiscal ecológico, que fomente y promueva las mejores prácticas ambientales en el desarrollo de las actividades.

Como ya se ha expuesto, la aprobación de directivas, reglamentos y otros actos de alto contenido técnico por parte de las instituciones de la Unión Europea se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas, asumiendo unas mayores exigencias y estándares de protección del medio ambiente. Este hecho, en su versión negativa, ha supuesto la creación de multitud de procedimientos complejos de autorización que podrían erigirse como un obstáculo para el desarrollo de actividades económicas que pudiese redundar en una menor protección de los objetivos de protección del medio ambiente para los cuales dicha normativa se dicta.

El contenido de la presente Ley se articula bajo la premisa del concepto de “normativa inteligente” enunciado por la Comisión Europea, que promueve una aprobación de normas por parte de los Estados miembros que refuercen el papel de la ciudadanía, analicen los impactos de la normativa en la vida socioeconómica en general y tiendan a una simplificación administrativa unificando procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios, lo que mejorará sustancialmente tanto la labor de las administraciones públicas como el desarrollo de las actividades vascas.

Por esta razón son fundamentales las medidas diseñadas por esta Ley para agilizar y simplificar el funcionamiento de la Administración Ambiental con el objeto de reducir y simplificar la intervención administrativa. Se configura así, un sistema que regula las diferentes técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental satisfaciendo el interés general de la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos y ciudadanas pero a la vez garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia en la actuación de los poderes públicos, elementos estos esenciales de lo que debe ser una buena administración.

Indispensable es, también, mejorar el conocimiento y la información sobre el medio ambiente, al que la sociedad en su conjunto tiene derecho, facilitando en todos los procedimientos administrativos la participación pública, ya que únicamente mediante una fluida interrelación público-privada será posible avanzar en un mayor conocimiento ambiental que promueva la consecución de los objetivos comunes de la CAPV y que impulse la responsabilidad compartida de la ciudadanía, de modo que ésta se convierta en un agente activo que se involucre en la prevención del deterioro del medio ambiente y promueva su defensa y recuperación.

La presente Ley, que encuentra su amparo legal en la competencia establecida en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo y



ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, contiene 116 artículos que se estructuran en 9 títulos.

El título I, de disposiciones generales, plasma el objeto de la Ley y los objetivos que con ella se persigue alcanzar, configurando el marco normativo de la protección del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con los principios en los cuales se fundamenta y que constituyen las pautas de actuación de las Administraciones públicas y los criterios que servirán para interpretar las normas que regulan dicha protección. Además, en este título se formulan los derechos y los deberes de las personas públicas y privadas en relación, entre otros aspectos, con el derecho al disfrute del medio ambiente, su protección, conservación y mejora.

El título II regula las competencias que en materia de medio ambiente corresponden a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y a las Administraciones forales y locales, estableciendo como instrumentos de coordinación de la política ambiental el Programa Marco Ambiental en el que se contendrán las líneas estratégicas y los compromisos para mejorar la calidad del medio ambiente durante su periodo de vigencia. Asimismo, se configura el Consejo de Medio Ambiente como órgano consultivo y de cooperación entre las Administraciones públicas y los sectores que representan a los intereses sociales y económicos en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales.

El título III, dedicado a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, tiene como finalidad el diseño de una nueva sistemática en la relación entre la Administración pública ambiental y la ciudadanía vasca, facilitando la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y regulando aspectos tales como el derecho a la información en materia de medio ambiente y su difusión. El sistema que permitirá integrar toda la información sobre el medio ambiente que generen tanto las entidades públicas como privadas a fin de que sea utilizada en la gestión, la difusión y la toma de decisiones también es regulado con la finalidad de que el acceso a la información ambiental se garantice del modo más amplio y tecnológicamente avanzado en consonancia con los requerimientos de una administración electrónica.

El título IV procede a regular la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente bajo las premisa de simplificación y unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial de protección del medio ambiente, integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades. Se establece, así, un nuevo sistema de intervención administrativa para todas las actividades de modo que, para cada grupo de actividades comprendido en el anexo I de la Ley, exista un único procedimiento con una única



resolución administrativa que incorpore todas las medidas preventivas frente a los impactos ambientales.

De este modo, se establecen los regímenes jurídicos de la autorización ambiental integrada, cuya regulación se mantiene fiel a la normativa europea sobre prevención y control integrados de la contaminación, y la nueva autorización ambiental única emitida por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en las que se integran en un solo procedimiento las autorizaciones, permisos e informes que actualmente se encuentran dispersos en la normativa sectorial protectora del medio ambiente. Además, incluye la regulación de la licencia de actividad clasificada y la comunicación previa de actividad clasificada que gestionarán por las entidades locales introduciendo alguna modificaciones relevantes.

En este sentido, y en aras a garantizar un reparto equilibrado de funciones interinstitucional, las competencias que en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales se atribuían a estos órganos en relación con calificación, señalización de medidas correctoras, inspección y sanción en relación con actividades, que puedan establecerse, en suelo urbano residencial, se sustituyen por las facultades de imposición de medidas correctoras en aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes, y en los municipios de más de 10.000, si así lo solicita el Ayuntamiento correspondiente al órgano foral competente.

Asimismo, en aras a agilizar la tramitación de los diferentes procedimientos de intervención ambiental, sin disminuir las garantías de participación del público interesado, se elimina el trámite de notificación a los vecinos inmediatos al lugar donde se vaya a emplazar una actividad, sustituyéndolo por la publicación en el Boletín Oficial correspondiente y en la sede electrónica del órgano competente para otorgar la autorización o licencia.

Asimismo, la ley integra en los procedimientos de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única el procedimiento para el otorgamiento de la autorización de vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la integración no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a dichas Administraciones en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.

El título V, de evaluación ambiental, actualiza el régimen de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos recogidos en el anexo II de la Ley



en aras a hacer efectiva la integración de los aspectos ambientales en su elaboración, aprobación o autorización, seleccionando las alternativas que resulten ambientalmente viables y estableciendo las medidas de todo tipo para compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Se regulan así los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada de planes y programas que permiten, en el primer caso, determinar los efectos significativos de aquellos, estableciendo, si procede, las condiciones que deban adoptarse para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales y, en el segundo caso, determinar si procede o no el sometimiento al procedimiento ordinario y los términos que en que deba ser aprobado.

Por su parte, los dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ordinaria y simplificada, se regulan, en el primero de los supuestos con el fin de valorar los efectos significativos de un proyecto en el medio ambiente y, si procede, fijar las condiciones para su ejecución, explotación, y desmantelamiento y, con la finalidad, en el segundo, de que se evalúe el sometimiento o no al procedimiento ordinario o bien determinar las medidas que sean precisas para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, compatibilizando de esta forma el desarrollo de proyectos con la adecuada protección del entorno.

Con la finalidad de garantizar la participación efectiva de las personas que deban ser consultadas según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación ambiental, se crea el Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental, registro que dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El título VI contempla los instrumentos de impulso de la mejora ambiental entre los cuales se encuentran los acuerdos medioambientales, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS) y la Etiqueta Ecológica Europea, como elementos que posibiliten la corresponsabilidad público privada en la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones que se fijan en la normativa reguladora de esta materia. El análisis del ciclo de vida de los productos y organizaciones con el fin de medir su impacto ambiental potencial y analizar su reducción, la compra pública verde como mecanismo básico para el cumplimiento de los objetivos de la Ley encomendando a las Administraciones públicas su promoción y puesta en valor, la eco-innovación en productos y procesos que permitan aprovechar las oportunidades de mercado que genera el medio ambiente y el establecimiento de un sistema de fiscalidad ambiental, absolutamente finalista y dedicado a la promoción y mejora del medio ambiente son las herramientas y los nuevos retos que la sociedad vasca debe asumir en la protección del medio ambiente. La investigación, la educación y la formación son también objeto de la norma partiendo de la mejora en la base de conocimiento sobre el medio ambiente como medio tractor para extender, entre la ciudadanía y



el conjunto de instituciones, actuaciones, valores y comportamientos que redunden en la mejora de medio ambiente. En esta misma dirección se prevé la participación de los ciudadanos y ciudadanas en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general con contenido ambiental y las acciones de reconocimiento para aquellos contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de la Comunidad Autónoma.

El título VII, en el que se regula el control ambiental, contempla, por un lado, a las entidades de colaboración ambiental a las que las Administraciones públicas pueden encomendar el desempeño de funciones de verificación y control de actividades. Su funcionamiento, nivel de actividad y alcance de sus actuaciones serán objeto de desarrollo reglamentario. Por otro lado, la inspección ambiental que garantice la adecuación a la legalidad ambiental de las actividades sometidas a la Ley es objeto de regulación pormenorizada en cuestiones como el personal encargado de las labores de control, vigilancia e inspección ambiental que podrán realizarse bien directamente por el personal al servicio de las Administraciones públicas o por entidades y personas designadas a tal efecto, siempre que demuestren su capacidad técnica; la planificación de la inspección ambiental, que deberá plasmarse en planes que se elaborarán periódicamente con el contenido mínimo que la Ley señala y que se concretarán en programas de inspección en los que se incluirán las frecuencias de las visitas para los distintos tipos de actividades con incidencia ambiental basándose en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales que tome en consideración los criterios que esta norma fija y otros que podrán ser establecidos reglamentariamente.

El título VIII, regula la restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños ambientales, de modo que se detallan las medidas a adoptar para la legalización de las actividades en funcionamiento cuando no dispongan de autorización o licencia, o no hayan sustanciado los trámites del procedimiento de comunicación previa o, cuando disponiendo de ellas, se adviertan deficiencias en su funcionamiento. El procedimiento para restaurar la legalidad ambiental, autónomo del procedimiento sancionador, es también objeto de regulación en la Ley incluyendo la posible ejecución forzosa de las medidas que resulte oportuno adoptar. La responsabilidad por daños ambientales se contempla en ley con la finalidad de prevenir, evitar y reparar dichos daños cuando tengan carácter significativo, junto con las amenazas inminentes de que los mismos sean ocasionados, en la forma y condiciones reguladas en la normativa sobre responsabilidad ambiental.

Finalmente el Título IX regula la disciplina ambiental y recoge la tipificación de los hechos constitutivos de infracción clasificándolos como muy graves, graves y leves, sobre la base los riesgos generados al medio ambiente, a las personas o a sus bienes. La graduación de las sanciones se fija para cada tipo de infracción



estableciéndose que en su imposición se deberá guardar la adecuación con la gravedad de la infracción considerando los criterios que la ley especifica. Se prevé también, dentro del régimen disciplinario, la obligación de reponer la situación alterada como consecuencia de los hechos constitutivos de infracción así como la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración pública. Como medidas complementarias, que desincentiven la comisión de infracciones se establece la prohibición de contratar con la administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en aquellos casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves hasta en tanto no se hayan ejecutado las medidas correctoras pertinentes o se haya satisfecho el importe de la sanción, así como la creación de un registro de infractores en el que se inscribirán las personas públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme. En esta misma línea se prevé dar publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de dichas infracciones así como de la identidad de sus responsables. Por último se contempla la prestación ambiental sustitutoria de las sanciones consistentes en la imposición de multas que podrá consistir en acciones de restauración, conservación o mejora que redunden en beneficio del medio ambiente, en las condiciones y términos que el órgano que imponga la sanción determine.

Finalmente el Título IX regula la disciplina ambiental y recoge la tipificación de los hechos constitutivos de infracción clasificándolos como muy graves, graves y leves, sobre la base los riesgos generados al medio ambiente, a las personas o a sus bienes. La graduación de las sanciones se fija para cada tipo de infracción estableciéndose que en su imposición se deberá guardar la adecuación con la gravedad de la infracción considerando los criterios que la ley especifica. Se prevé también, dentro del régimen disciplinario, la obligación de reponer la situación alterada como consecuencia de los hechos constitutivos de infracción así como la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración pública. Como medidas complementarias, que desincentiven la comisión de infracciones se establece la prohibición de contratar con la administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en aquellos casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves hasta en tanto no se hayan ejecutado las medidas correctoras pertinentes o se haya satisfecho el importe de la sanción, así como la creación de un registro de infractores en el que se inscribirán las personas públicas y privadas infractoras sobre las que haya recaído una resolución firme. En esta misma línea se prevé dar publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de dichas infracciones así como de la identidad de sus responsables. Por último se contempla la prestación ambiental sustitutoria de las sanciones consistentes en la imposición de multas que podrá consistir en acciones de restauración, conservación o mejora que redunden en beneficio del medio



ambiente, en las condiciones y términos que el órgano que imponga la sanción determine.

Finalmente, trascurridos 12 años desde la aprobación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas se ha considerado necesario proceder a la modificación de la misma con el fin de adecuar su contenido al actual marco normativo.

De este modo, consecuentemente con lo dispuesto en el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, se han modificado los artículos 22 al 24 del capítulo IV Planificación Hidrológica y, en coherencia, se ha eliminado la disposición adicional primera.

El citado Real Decreto establece, entre otras funciones, la coordinación y elaboración de los planes hidrológicos y de los programas de medidas correspondientes en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, demarcación que incluye el ámbito de la Demarcación competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Cuencas Internas, y el ámbito de competencia estatal, las cuencas intercomunitarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el real decreto, la planificación y la gestión del agua en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental deberá realizarse de forma coordinada por la Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la autoridad hidráulica competente (Agencia Vasca del Agua).

Asimismo, se ha sido necesario modificar los apartados k) y l) del artículo 7 en lo relativo a los informes de planeamiento para incluir una visión más holística de la protección del recurso y del medio acuático al considerar en dichos informes aspectos tales como la salvaguarda de las zonas de protección del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

En relación con dichos informes al planeamiento también se han modificado los apartados k) y l), en lo relativo a su consideración como desfavorables en tanto no se emitan, por homogeneidad y coherencia con lo dispuesto en la normativa de aplicación en el resto del territorio de la CAPV, es decir, en el ámbito intercomunitario donde también es de aplicación el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas. De este modo, se considera necesario establecer una homogeneidad de trato en todo el territorio para evitar la desprotección de los intereses públicos que podría producirse en el caso de no emisión de un informe



que, por su complejidad bien puede demorarse, y que, de no emitirse, habilitaría cualquier pretensión urbanística por desafortunada que fuera.

Se modifica el capítulo VI, que pasa a denominarse Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano, en el cual se crean dos secciones, una relativa al Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano y otra relativa a las Normas Generales del Ciclo de Agua de Uso Urbano y riego.

Se matizan también algunos aspectos de la Ley de 1/2006, de 23 de junio, de Aguas como por ejemplo el hecho imponible del Canon del Agua.

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

- a) Proteger a sus ciudadanos y ciudadanas frente a las presiones y riesgos medioambientales.
- b) Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido dañado.
- c) Gestionar eficientemente los recursos promoviendo una economía sostenible e hipocarbónica.
- d) Limitar la influencia del cambio climático.
- e) Impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente.
- f) Agilizar el funcionamiento de la Administración ambiental mediante la simplificación y unificación de los procedimientos administrativos, regulando las técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen.
- g) Establecer mecanismos eficaces de inspección y de suministro y difusión pública de información que faciliten el control de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.



- h) Impulsar las medidas necesarias para coordinar el ejercicio de competencias por los diferentes órganos y Administraciones públicas competentes en la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.
- i) Mejorar la base de conocimientos e información sobre el medio ambiente.
- j) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- a) Autorización ambiental integrada: la resolución escrita del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una actividad o instalación de las contempladas en el anexo I.A, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente Ley.
- b) Autorización ambiental única: la resolución escrita del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco por la que se permite, a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una actividad o instalación de las contempladas en el anexo I.B, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación de acuerdo con el ámbito de aplicación contemplado en la presente Ley.
- c) Actividad o instalación existente: cualquier actividad o instalación autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
- d) Declaración ambiental estratégica: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se pronuncia a efectos de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.
- e) Declaración de impacto ambiental: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental



ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación, y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

- f) Ecoinnovación: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado u objetivo es una mejora significativa de la protección del medio ambiente. Incluye los nuevos procesos de fabricación, los nuevos productos o servicios, y los nuevos métodos empresariales o de gestión, cuya utilización o ejecución pueda prevenir o reducir sustancialmente los riesgos para el medio ambiente, la contaminación u otros impactos negativos del uso de recursos, a lo largo del ciclo de vida de las actividades a ellos vinculadas
- g) Estudio ambiental estratégico: estudio elaborado por el promotor que, siendo parte integrante del plan o programa, identifica, descubre y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse de la aplicación de plan, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
- h) Estudio de impacto ambiental: documento elaborado por el promotor en el que se identifica, descubre, cuantifica y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, analiza las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.
- i) Informe ambiental estratégico: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada y que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.
- j) Informe de impacto ambiental: informe preceptivo y vinculante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
- k) Instalación: cualquier unidad técnica fija o móvil en donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas en el anexo I de esta Ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.



- l) Licencia actividad clasificada: resolución escrita del órgano competente de la Administración local por la que se permite el desarrollo de una actividad clasificada bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley y la normativa que le resulte de aplicación.
- m) Mejores técnicas disponibles: la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la base de los valores límite de emisión y otras condiciones de la autorización destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y la salud de las personas.

A estos efectos se entenderá por:

- m.1. «Técnicas»: la tecnología utilizada junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada.
- m.2. «Técnicas disponibles»: las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables.
- m.3. «Mejores técnicas»: las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto.
- n) Modificación sustancial: cualquier modificación realizada en una actividad o instalación autorizada que, en opinión del órgano competente para otorgar dicha autorización, licencia o recepción de su comunicación previa, y de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley, pueda tener repercusiones significativas en el medio ambiente y las personas.
- o) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o de la extensión de la actividad o instalación autorizada, que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en el medio ambiente y la salud de las personas.
- p) Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Viceconsejería competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco u órgano que la sustituya.
- q) Público interesado: todos aquéllos en quienes concurren cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y



cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro, constituidas con al menos dos años de antigüedad que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la toma de una decisión en su ámbito territorial de actuación.

- r) Público en general: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.
- s) Valores límite de emisión: la masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados.

Artículo 3. Principios.

1. La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios:
 - a) Cautela y acción preventiva, prevención de la contaminación en su origen y “quien contamina paga”.
 - b) El acceso a la información, la transparencia y la participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
 - c) Utilización racional de los recursos naturales y uso eficiente de la energía.
 - d) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones.
 - e) Adaptación al progreso técnico de las instalaciones y actividades para la protección del medio ambiente.
2. Las medidas que se adopten para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se aplicarán de acuerdo con los principios de agilidad, simplificación procedimental y reducción de cargas administrativas.
3. Los principios de esta Ley constituyen pautas de actuación de las Administraciones públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y criterios de interpretación de las correspondientes normas de protección del medio ambiente y de la salud de las personas.

Artículo 4. Utilidad pública e interés social.



Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos, y en particular a los expropiatorios respecto de los bienes o derechos que pudieran resultar afectados, de conformidad todo ello con lo que establece la legislación en la materia.

Artículo 5. Derechos de las personas.

De acuerdo con lo previsto en la presente Ley, todas las personas tienen derecho:

- a) A disfrutar de un medio ambiente adecuado.
- b) A participar, directamente o por medio de asociaciones, y en los términos que establezcan las correspondientes normas, en el diseño de las políticas y en las decisiones para la protección del medio ambiente.
- c) A obtener información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales.
- d) A ejercer la acción pública para exigir a las Administraciones públicas vascas el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación ambiental.
- e) A que los órganos de las Administraciones públicas competentes, actúen de acuerdo con los principios de una buena administración, garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia con el objetivo de satisfacer el interés general.

Artículo 6. Deberes de las personas.

De acuerdo con lo previsto en la presente Ley, todas las personas tienen el deber de:

- a) Proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
- b) Evitar o, en su caso, reducir la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos a las aguas y el suelo.
- c) Restaurar, en su caso, el medio ambiente alterado.
- d) Contar con el título administrativo correspondiente para realizar cualquier actividad, dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, que pueda incidir en el medio ambiente y la salud de las personas y cumplir las condiciones establecidas para su ejercicio.



TÍTULO SEGUNDO. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

Artículo 7. Competencias en materia de medio ambiente.

1. Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
 - a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
 - b) La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel autonómico.
 - c) La adopción de las medidas necesarias para la directa aplicación de los reglamentos de la Unión Europea y el desarrollo y ejecución de las obligaciones establecidas por las directivas y el resto de la normativa europea.
 - d) El ejercicio de las competencias atribuidas en esta Ley en relación con la ordenación, inspección y disciplina de las actividades con incidencia en el medio ambiente y la salud de las personas.
 - e) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley y por el resto de la normativa sectorial en materia de medio ambiente.
2. Corresponden a los Órganos Forales de los Territorios Históricos además de las competencias reconocidas en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales, las siguientes:
 - a) La elaboración y aprobación de los planes y estrategias ambientales a nivel de Territorio Histórico y, en particular, el desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos urbanos, a través de sus correspondientes planes forales.
 - b) Asistir a los ayuntamientos en relación con las actividades e instalaciones sometidas al procedimiento de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada que se regulan en la presente Ley.
 - c) La emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los procedimientos de evaluación ambiental cuando la competencia sustantiva para la aprobación definitiva o para la autorización del plan, programa o proyecto resida en los órganos forales de los Territorios Históricos de acuerdo con lo que establece esta Ley.



- d) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley y por el resto de la normativa sectorial en materia de medio ambiente.
3. Corresponde a los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ámbito de sus competencias:
 - a) El ejercicio de las competencias atribuidas en esta Ley en relación con la ordenación, inspección y disciplina de las actividades con incidencia en el medio ambiente y la salud de las personas.
 - b) El ejercicio de otras competencias atribuidas por la presente Ley y por el resto de la normativa en materia de medio ambiente.

Artículo 8. Ejercicio de competencias por las Administraciones Públicas.

1. En el ejercicio de sus competencias en materia de medio ambiente, las diversas Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, cooperación, coordinación e integración de los requisitos de protección del medio ambiente en el resto de políticas públicas. En particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus actuaciones, suministrándose mutuamente información para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley.
2. A tal fin, las Administraciones públicas diseñarán y gestionarán mecanismos de colaboración ajustando sus actuaciones a los principios de información mutua y colaboración con el fin de impulsar la gestión integrada de las políticas ambientales, económicas y sociales de los municipios de forma consensuada entre dichas administraciones y la ciudadanía.
3. Para garantizar la coherencia de la política ambiental, corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés público ambiental.

Artículo 9. Programa Marco Ambiental.

1. La política ambiental del País Vasco se concretará en un Programa Marco Ambiental que contendrá un diagnóstico sobre la situación del medio ambiente, las líneas estratégicas y los compromisos a llevar a cabo para la mejora de su calidad durante su periodo de vigencia.
2. El Programa Marco Ambiental, que podrá desarrollarse mediante planes específicos, será elaborado por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma



del País Vasco y aprobado por el Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo de Medio Ambiente. El Programa establecerá su periodo de vigencia y procedimiento para su seguimiento y revisión.

Artículo 10. Consejo de Medio Ambiente.

1. Se crea el Consejo de Medio Ambiente como un órgano consultivo y de cooperación con el fin de favorecer la relación y participación de las Administraciones públicas y los sectores representativos de intereses sociales, económicos y de la Universidad, en la elaboración, consulta y seguimiento de las políticas ambientales. El Consejo estará adscrito al Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Corresponden al Consejo de Medio Ambiente las siguientes funciones:
 - a) Asesorar e informar en materia de política ambiental con respecto a los planes y programas que sean sometidos a su consideración y guarden relación con el medio ambiente.
 - b) Informar los anteproyectos de Ley y los proyectos de disposiciones generales, que guarden relación con la protección del medio ambiente.
 - c) Informar el Programa Marco Ambiental previsto en esta Ley.
 - d) Informar los proyectos de declaración, designación, planificación y gestión de espacios naturales protegidos.
 - e) Proponer o emitir informes así como medidas que conecten las políticas ambientales con la generación de empleo, el desarrollo sostenible, la coordinación de la iniciativa económica pública y privada y la participación, educación y sensibilización ciudadana en materia medioambiental.
 - f) Impulsar la participación de las universidades y centros de investigación en la política ambiental.
 - g) Adoptar las normas de funcionamiento interno del Consejo y crear, en su caso, secciones, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
 - h) Ejercer las demás funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
3. Los informes, recomendaciones y propuestas del Consejo de Medio Ambiente no tendrán carácter vinculante.



Artículo 11. Composición.

1. El Consejo de Medio Ambiente estará presidido por la persona titular del Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y formarán parte del mismo los vocales que se designen en representación de:
 - a) El Parlamento Vasco.
 - b) El Gobierno Vasco.
 - c) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
 - d) Los municipios.
 - e) Las asociaciones o movimientos ciudadanos representativos de sectores ambientales.
 - f) Las organizaciones de consumidores y usuarios.
 - g) Las organizaciones y agrupaciones empresariales.
 - h) Las organizaciones sindicales.
 - i) Los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.
 - j) Las universidades con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 - k) Personas expertas de reconocido prestigio en materia de medio ambiente.
2. Reglamentariamente se detallará la composición del Consejo de Medio Ambiente, el procedimiento de designación de sus miembros y sus reglas básicas de organización y funcionamiento.

TÍTULO TERCERO. INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA AMBIENTAL

Artículo 12. Información ambiental.

1. A los efectos de esta Ley se considera información ambiental toda la que en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material, obre en poder de las administraciones públicas y de los demás entes pertenecientes al sector público o en el de otros sujetos en su nombre, relativa a las materias reguladas por las Directivas europeas sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y su normativa de transposición, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.



2. La Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará y publicará cada año un informe de coyuntura sobre el estado del medio ambiente y cada cuatro años un informe completo. Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra, así como un sumario no técnico que sea comprensible para el público.

Artículo 13. Difusión de la información ambiental.

1. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá disponer de un sistema de información de acceso público que contenga, al menos, datos suficientes sobre:
 - a) El estado y calidad de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, el paisaje, la Red Natura 2000 y las zonas de especial protección del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, incluidas sus interacciones recíprocas.
 - b) Los planes y programas de gestión ambiental y demás actuaciones públicas de protección ambiental o que hayan afectado o puedan afectar a los elementos y condiciones del medio ambiente.
 - c) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente.
 - d) Las autorizaciones ambientales integradas y las autorizaciones ambientales únicas emitidas.
 - e) Las declaraciones e informes ambientales emitidos por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre planes, programas y proyectos.
 - f) La lista de autoridades públicas ambientales en cuyo poder obre la información ambiental.
2. Las Administraciones públicas y los demás entes pertenecientes al sector público garantizarán el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en su poder o en el de otros sujetos que la posean en su nombre y facilitarán su difusión y puesta a disposición del público de la manera más amplia, sistemática y tecnológicamente avanzada garantizando la igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la reutilización de los datos públicos.
3. Con este fin, entre otros, se crea INGURUNET, Sistema de Información Ambiental del País Vasco, dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá por objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, generada por todo tipo de entidades públicas o privadas productoras de información ambiental, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones.



4. Al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde la organización, gestión y evaluación del Sistema de Información Ambiental, así como aprobar las normas y criterios que normalicen dicha información y garanticen su uso compartido y su reutilización. Dichas actuaciones serán objeto de desarrollo reglamentario.
5. Para garantizar el flujo de la información ambiental disponible, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco fomentará políticas de colaboración con otras Administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros, con el fin de integrar y coordinar, en su caso, los sistemas de información existentes.

Artículo 14. Solicitud de Información Ambiental.

1. Las solicitudes de información ambiental se tramitarán de conformidad y con las garantías establecidas en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Cuando una determinada y concreta información ambiental no haya sido difundida o no esté disponible para su acceso público, cualquier persona podrá solicitarla al órgano o autoridad competente de cualquiera de las Administraciones del País Vasco en cuyo poder obre la información.
3. El órgano o autoridad pública competente en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, o de dos meses en el caso de que de la información solicitada tengan un gran volumen o complejidad, deberá facilitar la información solicitada o bien denegarla determinando los motivos.
4. Serán motivos de denegación de información los establecidos en la Directiva sobre los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que en todo caso deberán ser objeto de interpretación restrictiva.
5. Contra la resolución denegatoria de la información cabrán los correspondientes recursos administrativos.

Artículo 15. Participación ambiental.

1. Las Administraciones públicas y los demás entes pertenecientes al sector público promoverán y garantizarán el correcto ejercicio del derecho de participación, real y efectiva, en los procedimientos para la toma de



decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación les corresponda.

2. En particular, las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, promoverán y garantizarán la participación del público interesado y del público en general en los procedimientos de intervención ambiental y en la elaboración, modificación, revisión y aprobación de planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente.
3. El público interesado y el público en general podrá hacer uso de su derecho de participación en los citados procedimientos antes de que se adopte cualquier decisión, mediante la presentación de comentarios, observaciones o alegaciones que en todo caso deberán ser objeto de respuesta motivada.

Artículo 16. Acción pública.

1. Será pública la acción para exigir ante las Administraciones con competencias ambientales del País Vasco el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
2. Cualquier persona podrá solicitar a las Administraciones competentes la adopción de las medidas de restauración de la legalidad ambiental, de responsabilidad por daños ambientales, así como denunciar las actuaciones que se presuman infracciones según lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 17. Administración electrónica.

La utilización de los servicios electrónicos en las actuaciones llevadas a cabo por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de la presente Ley será preceptiva, de conformidad a lo dispuesto en la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, y se llevará a cabo con pleno sometimiento a los derechos reconocidos en la normativa reguladora del acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.



TITULO CUARTO. ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 18. Regímenes de intervención ambiental.

1. Las actividades e instalaciones públicas y privadas relacionadas en el anexo I de esta Ley quedan sometidas a los siguientes regímenes de intervención ambiental:
 - a) Las actividades e instalaciones del anexo I. A, al régimen jurídico de autorización ambiental integrada.
 - b) Las actividades e instalaciones del anexo I. B, al régimen jurídico de autorización ambiental única.
 - c) Las actividades e instalaciones del anexo I. C, al régimen jurídico de licencia de actividad clasificada.
 - d) Las instalaciones y actividades del anexo I. D, al régimen jurídico de comunicación previa de actividad clasificada.
2. La determinación del sometimiento de las actividades e instalaciones a los diferentes regímenes de intervención ambiental regulados en esta Ley se realiza con base en la mayor o menor afección de dichas actividades teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - a) La dimensión y capacidad de producción de la instalación.
 - b) El consumo de agua, energía y otros recursos.
 - c) La cantidad, peso y tipología de los residuos generados.
 - d) Las potenciales emisiones a la atmosfera y a las aguas.
 - e) El riesgo de accidente.
 - f) El uso de sustancias peligrosas.
3. Los regímenes jurídicos de licencia de actividad clasificada y comunicación previa de actividad clasificada previstos en esta Ley se aplicarán sin perjuicio de la realización de los trámites de comunicación, notificación o registro ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco u otras Administraciones públicas que sean preceptivos de acuerdo con lo que a tal fin establezca la normativa sectorial en materia de medio ambiente.
4. Cuando una actividad o instalación incluida en alguno de los regímenes de intervención ambiental previstos en este artículo deba de someterse a otro de



dichos regímenes como consecuencia de una ampliación o modificación de la actividad, tal cambio se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento correspondiente establecido en esta Ley.

5. Las actividades e instalaciones, o parte de las mismas, dedicadas a investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos no se someterán a los regímenes de intervención ambiental previstos en este artículo sin perjuicio de que el órgano ambiental que fuera competente para su autorización, si estuvieran sometidos a la misma, establezca las medidas preventivas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, para lo cual, el promotor deberá presentar una comunicación e información suficiente sobre las características y la estimación de la duración de la actividad proyectada al citado órgano.

Artículo 19. Plazos para el inicio de las actividades autorizadas.

1. Los plazos para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán de 5 y 3 años respectivamente.
2. Los plazos para el inicio de las actividades a las que se les ha otorgado la licencia de actividad clasificada o han presentado comunicación previa de actividad clasificada serán de 2 años.
3. Transcurridos dichos plazos sin haber dado inicio de forma efectiva a la actividad por causa imputable a su promotor, el órgano competente resolverá la caducidad de la habilitación para actuar.
4. Dichos plazos serán susceptibles de una única prórroga por razones debidamente justificadas a solicitud del interesado, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de los mismos.

Artículo 20. Finalidades.

Los regímenes de intervención ambiental que se regulan en este Título tienen como finalidades:

- a) Prevenir, o cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, al objeto de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas.



- b) Preservar la diversidad del medio natural de las afecciones que pudieran derivarse de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Título.
- c) Velar por el uso sostenible de los recursos naturales y la correcta gestión de los residuos.

Artículo 21. Consultas previas.

1. Con anterioridad al inicio de los procedimientos relativos a los regímenes de intervención ambiental, la persona física o jurídica promotora de la actividad podrá solicitar al órgano competente para su tramitación, información sobre los requisitos administrativos y técnicos de dicho procedimiento. Dicha consulta deberá adjuntar una memoria resumen descriptiva en la que se detallen las características básicas de la actuación a desarrollar.
2. El órgano competente deberá responder a la petición de información en el plazo máximo de tres meses y para ello podrá elevar consultas a las personas, instituciones y Administraciones públicas previsiblemente afectadas por el proyecto y sobre los contenidos específicos a incluir en la documentación que se presente junto con la solicitud o comunicación.

Artículo 22. Concurrencia de los regímenes de intervención ambiental con la evaluación de impacto ambiental.

Cuando una actividad se encuentre a la vez sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y a alguno de los otros regímenes de intervención ambiental previstos en esta Ley, su tramitación deberá realizarse de acuerdo con las siguientes normas:

- a) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada o al de autorización ambiental única, los procedimientos administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán. Asimismo, el contenido de la declaración de impacto ambiental formará parte de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental única.
- b) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco



o de la Administración Foral y la actividad se encuentre sometida al régimen de licencia de actividad clasificada, la declaración de impacto ambiental deberá emitirse con anterioridad a la concesión por el ayuntamiento correspondiente de la licencia de actividad. La declaración de impacto ambiental será vinculante para la autoridad local.

- c) Cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de la Administración Foral y la actividad se encuentre sometida al régimen de comunicación previa de actividad clasificada, esta comunicación no podrá presentarse ante el ayuntamiento antes de la emisión de la correspondiente declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental serán vinculantes para la autoridad local.
- d) Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, no podrá otorgarse autorización, licencia de actividad clasificada o presentar comunicación previa de actividad clasificada sin que previamente se haya emitido dicha declaración o informe.

Artículo 23. Obligaciones de las Administraciones públicas.

Las Administraciones públicas que actúen en los procedimientos de intervención ambiental regulados en el presente Título estarán obligadas a:

- a) Gestionar los regímenes jurídicos de intervención ambiental de acuerdo con el principio de información mutua, cooperación y colaboración entre Administraciones públicas y de servicio a los ciudadanos.
- b) Velar por el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan en los instrumentos de intervención ambiental y en la normativa sectorial protectora del medio ambiente.
- c) Aprobar las disposiciones e instrucciones técnicas que sean necesarias para facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de intervención ambiental.
- d) Garantizar el acceso a la información ambiental relativa a las actividades objeto de la presente Ley y su impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas.



- e) Fomentar la participación del público interesado y del público en general desde una fase temprana en los procedimientos de intervención previstos en la presente Ley.
- f) Impulsar el reconocimiento del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS), el sistema de etiqueta ecológica de la Unión Europea y la ecoinnovación como medios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de medio ambiente.
- g) Cualquier otra obligación que se establezca en esta Ley y en la demás normativa aplicable.

Artículo 24. Obligaciones de los promotores.

Quienes sean promotores de las actividades e instalaciones que son objeto de regulación en este Título están obligados a:

- a) Disponer del correspondiente título de intervención en los casos en que éste sea preceptivo y cumplir con las condiciones derivadas del mismo o del régimen jurídico de comunicación previa.
- b) Cumplir con las obligaciones de suministro de información que se deriven de la presente Ley y de la normativa sectorial protectora del medio ambiente.
- c) Poner en conocimiento de los órganos de las Administraciones públicas competentes cualquier hecho derivado del funcionamiento normal o anormal de una actividad que pueda afectar significativamente al medio ambiente y la salud de las personas.
- d) En el supuesto de que se produzca un incumplimiento de las condiciones de su autorización o de la normativa de aplicación, la persona titular de la actividad o instalación deberá tomar sin demora las medidas correctoras necesarias y ponerlas en conocimiento de las administraciones ambientales competentes.
- e) Informar de la transmisión de las actividades e instalaciones al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el caso de las actividades de los apartados A y B del anexo I y de aquéllas otras actividades e instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante el citado órgano ambiental por disposición de otra normativa ambiental de aplicación. Asimismo, informar de dicha transmisión al ayuntamiento correspondiente, en todos los casos. Esta obligación corresponderá al transmitente, sin perjuicio de que la nueva persona titular pueda comunicar dicha transmisión.



- f) Prestar la colaboración necesaria para la correcta realización de las actuaciones de inspección desarrolladas por las diferentes Administraciones públicas.
- g) Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental única y aquéllas otras actividades e instalaciones sujetas a comunicación o declaración responsable ante órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto al citado órgano como al ayuntamiento donde se ubique la instalación.
- h) Presentar la comunicación previa de inicio de funcionamiento o apertura de las actividades sujetas a licencia de actividad clasificada ante el ayuntamiento donde se ubique la instalación.
- i) Cualquier otra obligación que se establezca en esta Ley y en el resto de normativa aplicable.

Artículo 25. Capacidad técnica y responsabilidad.

1. Los proyectos y documentación técnica, incluidos los estudios y documentos ambientales previstos en la normativa sobre evaluación ambiental, que formen parte de las solicitudes de inicio de los procedimientos previstos en este Título, deberán ser realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior.
2. Dicha documentación técnica tendrá la calidad necesaria para cumplir las exigencias de esta Ley. Con esta finalidad deberá identificarse a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada. Los autores de los citados documentos y el promotor serán responsables solidarios de su contenido y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma fehaciente.

Artículo 26. Confidencialidad.

1. Las Administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de intervención ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.



2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.
3. En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial de la información indicada por el promotor se deberá emitir una resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.

Artículo 27. Transmisión de las actividades o instalaciones.

1. Cuando se transmitan actividades o instalaciones sujetas a autorización, licencia o comunicación, será preceptivo ponerlo en conocimiento de la Administración competente otorgante del correspondiente título o receptora de la comunicación previa.
2. El nuevo titular se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades del transmitente. No obstante, responderán solidariamente respecto de las obligaciones y responsabilidades en tanto no se realice la comunicación a la que se refiere el apartado anterior.

Artículo 28. Cese de la actividad y cierre de la instalación.

1. El cese temporal o definitivo de las actividades o cierre de las instalaciones sujetas a esta Ley, deberá ser comunicada a la Administración competente para que se adopten las medidas oportunas contenidas en el propio título autorizador o en la legislación vigente que sean de aplicación.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerará que una actividad ha cesado definitivamente cuando haya transcurrido el plazo de un año sin desarrollarse la misma y no medie comunicación fehaciente del titular a la Administración autorizante en la que se expongan justificadamente los motivos de dicha situación.

Artículo 29. Modificación de las actividades e instalaciones.

1. El titular de la actividad o instalación deberá comunicar al órgano competente para autorizarla, cualquier modificación que pueda tener consecuencias en el medio ambiente y que afecte a las características, a los procesos productivos,



al funcionamiento o a la extensión de la actividad o instalación sometida a autorización, licencia o comunicación.

2. Cuando el titular de la instalación o actividad considere que la modificación no es sustancial deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización, licencia o recibir la comunicación indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas para tal consideración. Dicha modificación podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se hubiese pronunciado en contra el citado órgano competente en el plazo de un mes.

En cualquier caso, se considerará la modificación como no sustancial cuando se reduzcan las emisiones o no se modifiquen.

3. Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular o por la autoridad competente para autorizarla o para recibir la comunicación previa, esta no podrá llevarse a cabo hasta que no se produzca la modificación de su título autorizatorio por medio del procedimiento previsto en la presente Ley, o se presente una nueva comunicación previa.
4. Se considerará que se produce una modificación sustancial cuando la modificación de la actividad o instalación represente una mayor incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas y concurra cualquiera de los siguientes criterios:
 - a) Cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos, cuando estos existan, en el anexo I, o si ha de ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa sobre esta materia.
 - b) Un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción de la instalación en unidades de producto.
 - c) Un incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.
 - d) Un incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuren en la autorización o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
 - e) Un incremento de la emisión másica o de la concentración de vertidos, al dominio público hidráulico, de cualquiera de los contaminantes o del caudal de vertido que figure en la autorización, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.



- f) Un incremento de la emisión másica superior al 25% o del 25% de la concentración de vertidos de cualquiera de las sustancias prioritarias de acuerdo con la normativa de aguas o del 25% del caudal de vertido que figure en la autorización, así como la introducción de nuevas sustancias prioritarias de acuerdo con la normativa de aguas, cuando su destino no es el dominio público hidráulico.
- g) La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos en la autorización original, o el incremento de los mismos, que obliguen a elaborar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como el incremento de aquellos en cualquier cantidad para su uso habitual y continuado en el proceso productivo, cuando estén sujetos a convenios o acuerdos internacionales para su disminución o eliminación.
- h) Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas al año siempre que se produzca una modificación estructural del proceso y un incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
- i) Un incremento en la generación de residuos no peligrosos de más de 50 toneladas al año siempre que represente más del 50 % de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes, calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos autorizada.
- j) El cambio en el funcionamiento de una instalación de incineración o coincineración de residuos dedicada únicamente al tratamiento de residuos no peligrosos, que la transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de residuos peligrosos.
- k) Una modificación en el punto de vertido que implique un cambio en la masa de agua superficial o subterránea a la que fue autorizado.

CAPÍTULO II. AUTORIZACIONES AMBIENTALES.

Artículo 30. Autorización ambiental integrada.

1. Está sometida al régimen de autorización ambiental integrada la explotación de las actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I.A de la presente Ley



- y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo. Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.
2. Mediante la autorización ambiental integrada se integrarán en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre, emisiones a la atmósfera, fijándose los valores límite de emisión que correspondan con base en las mejores tecnologías disponibles.
 3. La autorización ambiental integrada se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas y demás normativa que resulte de aplicación.

Artículo 31. Autorización ambiental única.

1. Está sometida al régimen jurídico de autorización ambiental única la explotación de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I.B de la presente Ley. Esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.
2. Mediante la autorización ambiental única se integrarán en un solo acto y en un solo procedimiento administrativo previo emitido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las autorizaciones de producción y gestión de residuos, vertidos a colector, al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre, emisiones a la atmósfera, fijándose los valores límite de emisión que correspondan.
3. La autorización ambiental única se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la normativa de aguas, de costas y demás normativa que resulte de aplicación.

CAPÍTULO III. DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA Y A LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA.



Artículo 32. Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento.

1. Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación deberá emitir en el plazo de 30 días informe de compatibilidad urbanística del proyecto, actividad o instalación sometido a autorización ambiental. En caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una copia de la solicitud del mismo.
2. En todo caso, si el informe urbanístico regulado en este artículo fuera negativo, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental, el órgano ambiental competente para otorgar dicha autorización dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.

Artículo 33. Contenido de la solicitud.

1. La solicitud de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única, se presentarán ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y contendrán:
 - a) Proyecto técnico que incluya, al menos, los siguientes aspectos:
 - 1º Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los procesos productivos y el tipo de producto.
 - 2º En su caso, documentación que el interesado presenta ante la Administración pública competente para el control de las actividades con repercusión en la seguridad, salud de las personas o el medio ambiente de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
 - 3º En su caso, estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles impactos que se prevean, incluidos aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.
 - 4º Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleados o generados en la instalación.
 - 5º Fuentes generadoras de las emisiones de la instalación.
 - 6º Tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, a las aguas y al suelo, así como la determinación de sus efectos significativos sobre el medio ambiente, y, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar.



7º Las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos de los residuos generados por la instalación.

8º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

En el caso de instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada el proyecto técnico incluirá además:

- La tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir y evitar las emisiones procedentes de la instalación o, y si ello no fuera posible, para reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de acuerdo con las conclusiones relativas a las mejores tecnologías disponibles.
- Un breve resumen de las principales alternativas a la tecnología, las técnicas y las medidas propuestas, estudiadas por el solicitante, si las hubiera.
- b) Informe urbanístico del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.
- c) En su caso, la documentación exigida por la legislación de aguas y de costas para la autorización de vertidos a las aguas continentales o desde tierra al mar.

Cuando se trate de vertidos a las aguas continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado, esta documentación será inmediatamente remitida al organismo de cuenca por el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y única, a fin de que manifieste si es preciso requerir al solicitante que subsane la falta o complete la documentación aportada.

- d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con las disposiciones vigentes.
- e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles, entre otras, por la legislación de responsabilidad ambiental.
- f) Cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la posibilidad de contaminación del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas en el emplazamiento de la instalación, se requerirá un informe base antes de comenzar la explotación de la instalación o antes de la actualización de la autorización con la información necesaria para determinar el



estado del suelo y las aguas subterráneas, a fin de hacer la comparación cuantitativa con el estado tras el cese definitivo de las actividades.

2. A la solicitud de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única se acompañará un resumen no técnico de todas las indicaciones especificadas en el apartado anterior, para facilitar su comprensión a efectos del trámite de información pública.
3. En el caso de que la actividad o instalación o esté sometida además a evaluación ambiental ordinaria o simplificada, la solicitud deberá contener el estudio de impacto ambiental o el documento ambiental en su caso.

Artículo 34. Subsanación.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior, se requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días la subsane con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Artículo 35. Información Pública.

1. Una vez presentada la solicitud y comprobado que la documentación aportada está completa, el proyecto de instalación o actividad se someterá, previo anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del Gobierno Vasco, a un período de información pública de 30 días, al objeto de que puedan presentarse alegaciones.
2. El período de información pública será común para aquellos procedimientos que se integren en el procedimiento de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única, y en su caso, para la evaluación de impacto ambiental y para los procedimientos de autorizaciones sustantivas que precise la instalación.
3. Se exceptuarán del trámite de información pública aquellos datos de la solicitud que gocen de confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente y lo señalado en el artículo 26 de la presente Ley.



Artículo 36. Informe municipal en actividades sujetas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental única.

1. El procedimiento de autorización ambiental integrada o el de autorización ambiental única sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad clasificada.
2. Simultáneamente al período de información pública y a solicitud del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los municipios en cuyo término se pretenda desarrollar una actividad o instalación sometida a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental única, emitirán un informe preceptivo en el plazo de un mes desde la recepción del expediente, sobre aquéllas cuestiones propias de competencia municipal. De no emitirse el informe en plazo se proseguirán las actuaciones.
3. En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, éstas serán trasladadas al ayuntamiento en el que se ubique la actividad o instalación para su consideración en su informe municipal, para lo cual dispondrá de un plazo ampliado de un mes adicional desde el momento de la recepción de dichas alegaciones por parte del órgano ambiental.

Artículo 37. Informe de los organismos competentes en materia de vertidos.

1. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única precise autorización de vertido al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre, el organismo competente deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el plazo máximo de 6 meses, por el que se determinen las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar.
2. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única precise autorización de vertido a colector, el titular del mismo deberá emitir un informe preceptivo y vinculante en el plazo máximo de 3 meses, por el que se determinen las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar.
3. Transcurridos los plazos previstos en los apartados anteriores sin que se hubiesen emitido los informes, se podrá otorgar la autorización, contemplando en la misma las características del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable. No obstante, los informes recibidos fuera del plazo señalado y antes del



otorgamiento de la autorización deberán ser tenidos en consideración por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. Si los informes regulados en este artículo considerasen que es inadmisibile el vertido y, consecuentemente, impidiesen el otorgamiento de la autorización, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco dictará resolución motivada denegatoria.

Artículo 38. Otros informes.

1. Simultáneamente al período de información pública, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco solicitará los informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad a todos aquéllos órganos que en virtud de sus competencias deban pronunciarse para que en el plazo de un mes a la vista de la solicitud presentada informen sobre las materias que sean de su competencia.
2. En el caso de que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco recibiera alegaciones durante el período de información pública, éstas serán trasladadas a aquellos órganos que deban pronunciarse para su consideración en su informe, para lo cual dispondrá de un plazo adicional de un mes.
3. De no emitirse tales informes en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones, si bien los informes recibidos fuera de plazo pero antes de dictarse resolución por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser valorados por éste.

Artículo 39. Propuesta de resolución y audiencia del interesado.

1. A la vista de la documentación presentada, del resultado del trámite de información pública y de los informes antes citados, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución que someterá a un trámite de audiencia para el interesado por un plazo de 15 días.
2. Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.



3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no realizar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificantes, se tendrá por cumplimentado el trámite.

Artículo 40. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento de autorización ambiental integrada o autorización ambiental única determinará las condiciones de funcionamiento de la instalación o del desarrollo del ejercicio de la actividad a los meros efectos ambientales, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
2. La resolución motivada otorgando o denegando la autorización ambiental integrada se dictará en un plazo máximo de 9 meses desde la presentación de la solicitud. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.
3. La resolución motivada otorgando o denegando la autorización ambiental única se dictará en un plazo máximo de 6 meses desde la presentación de la solicitud. La falta de resolución en plazo tendrá efectos desestimatorios.
4. La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones se notificará a los interesados, al ayuntamiento donde se ubique la instalación, a los distintos órganos que hubiesen emitido un informe y, en su caso, al órgano competente para otorgar las autorizaciones sustantivas. La autorización ambiental integrada se publicará íntegramente en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La autorización ambiental única se publicará en la sede electrónica del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
5. La resolución motivada otorgando o denegando las autorizaciones incluirá, entre otros aspectos, información sobre las alegaciones formuladas en el trámite de información pública, sobre la valoración de las mismas por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sobre el contenido de los informes emitidos en el procedimiento administrativo.

Artículo 41. Valores límite de emisión de las autorizaciones ambientales.

1. La determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental integrada se hará con base en las mejores tecnologías disponibles, y en particular se deberá tener en cuenta:



- a) La información suministrada, en relación con las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica.
 - b) Las características técnicas de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las actividades e instalaciones enumeradas en los anexos I.A, y I., su implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente.
 - c) La naturaleza de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro.
 - d) Los planes aprobados, en su caso, para dar cumplimiento a compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales.
 - e) La incidencia de las emisiones en la salud humana potencialmente afectada y en las condiciones generales de la sanidad animal y vegetal.
 - f) Los valores límite de emisión fijados, en su caso, por la normativa en vigor en la fecha de la autorización.
2. En la determinación de los valores límite de emisión en la autorización ambiental única se podrán tomar en consideración las mejores tecnologías disponibles, de conformidad a lo expuesto en el apartado anterior.

Artículo 42. Contenido de la autorización ambiental integrada y de la autorización ambiental única.

1. La autorización ambiental integrada tendrá el contenido mínimo siguiente:
 - a) Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes y, en su caso, los parámetros o las medidas técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a estos valores límite. Asimismo, deberán especificarse las mejores técnicas disponibles contenidas en las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles que son utilizadas en la instalación para alcanzar los valores límite de emisión.
 - b) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas.
 - c) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de residuos.
 - d) Las prescripciones que garanticen, en su caso, la minimización de la contaminación con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos a larga distancia o transfronteriza.



- e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
- f) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.
- g) Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable. En particular, para las instalaciones en las que se realicen una o más operaciones de tratamiento de residuos.
- h) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.
- i) La obligación de comunicar al órgano competente regularmente y al menos una vez al año:
 - ii) Información basada en los resultados del control de las emisiones mencionado en la letra e) y otros datos solicitados que permitan al órgano competente verificar el cumplimiento de las condiciones de la autorización; y
 - iii) Cuando se apliquen valores límite de emisión que superen los valores de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles, un resumen de resultados del control de las emisiones que permita compararlos con los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles.
- j) Las condiciones para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión.
- k) En caso de que la autorización sea válida para varias partes de una instalación explotada por diferentes titulares, las responsabilidades de cada uno de ellos.

2. La autorización ambiental única tendrá el contenido mínimo siguiente:

- a) Los valores límite de emisión para las sustancias contaminantes y las prescripciones que garanticen, en su caso, la protección del suelo y de las aguas subterráneas.
- b) Los procedimientos y métodos que se vayan a emplear para la gestión de los residuos generados por la instalación, teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de residuos.
- c) En su caso, las prescripciones que garanticen la minimización de la contaminación con efectos negativos intercomunitarios o transfronterizos a larga distancia o transfronteriza.



- d) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
 - e) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como los casos de puesta en marcha y parada, fugas, fallos de funcionamiento y paradas temporales.
 - f) Las condiciones en que debe llevarse a cabo el cierre de la instalación.
 - g) Cualquier medida o condición establecida por la legislación sectorial aplicable o, motivadamente, por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental de carácter sectorial, el otorgamiento de las autorizaciones ambientales previstas en la presente Ley podrá supeditarse motivadamente por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al depósito de una fianza, aval o seguro que garantice el cumplimiento de las condiciones establecidas o la reparación o minimización de los daños que pudieran ocasionarse por la actividad o instalación autorizada.
- Las citadas garantías podrán minorarse por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el supuesto de que las actividades e instalaciones se encuentren inscritas en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Medioambientales (EMAS).
4. En el caso de que la instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única se encuentre sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, contendrá además los aspectos propios de la declaración de impacto ambiental o del informe ambiental según lo previsto en la presente Ley.

Artículo 43. Vigencia y revisión de las autorizaciones.

- 1. La autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única tienen una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.
- 2. En todo caso, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberá realizar la revisión de la autorización ambiental integrada en un plazo máximo de cuatro años desde la publicación de las conclusiones de las mejores técnicas disponibles, que sean de aplicación a la instalación o actividad



autorizada, con el fin si fuera necesario de adaptarlas y de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización. La revisión tendrá en cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles aplicables a la instalación, desde que la autorización fuera concedida, actualizada o revisada y cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

3. Cuando una instalación o actividad sujeta a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única no esté cubierta por ninguna de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles, las condiciones de la autorización se revisarán y, en su caso, adaptarán conforme a la cláusula de progreso referida en el apartado primero de este artículo.
4. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única serán revisadas de oficio cuando:
 - a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
 - b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
 - c) Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio receptor.
 - d) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
 - e) El organismo competente en materia de vertidos estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental concedida en lo relativo a la materia de su competencia. En este supuesto, el citado organismo requerirá, mediante informe vinculante al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco a fin de que inicie el procedimiento de revisión.
 - f) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad o instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental.

5. La revisión de las autorizaciones ambientales no dará derecho a indemnización.

Artículo 44. Procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales integradas.



El procedimiento para la modificación sustancial mencionada en el artículo 29 de la presente Ley, en los supuestos de actividades sujetas a autorización ambiental integrada será el previsto en la normativa básica que desarrolla la legislación de prevención y control integrados de la contaminación.

Artículo 45. Procedimiento de modificación sustancial de las autorizaciones ambientales únicas.

1. En el supuesto de actividades sujetas a autorización ambiental única el procedimiento de modificación sustancial se ordenará de acuerdo con los siguientes trámites:
 - a) La solicitud de modificación sustancial contendrá, al menos, la siguiente documentación:
 - a) Un proyecto básico que incluya, según corresponda:
 - 1º. La parte o partes de la instalación afectada por la modificación.
 - 2º. Los posibles impactos que se prevean con la modificación sustancial que se pretende, abarcando aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.
 - 3º. Medidas previstas para controlar los citados impactos al medio ambiente.
 - b) La documentación exigida por la normativa en materia de vertidos, en su caso.
 - c) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.
 - d) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles.
 - e) La documentación que establezca el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental al que deba someterse en el supuesto de que modificación sustancial proyectada esté sujeta a dicho trámite.
 - b) La documentación exigida por la normativa en materia de vertidos, en su caso.
 - c) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.
 - d) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles.
 - e) La documentación que establezca el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental al que deba someterse en el supuesto de que modificación sustancial proyectada esté sujeta a dicho trámite.
2. En la solicitud no se aportará el informe urbanístico del Ayuntamiento, salvo que se varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó; tampoco se deberá presentar aquella otra documentación referida a hechos, situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco con motivo de la solicitud de autorización original.



3. Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco requerirá, en su caso, al titular para que subsane la falta o acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de quince días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.
4. Presentada la documentación completa, el órgano competente:
 - a) La someterá a información pública por un plazo de veinte días.
 - b) la remitirá, en caso de que se produzcan modificaciones en las características del vertido autorizado, al organismo competente en materia de vertidos para que elabore el informe mencionado en el artículo 37 , en el plazo máximo de cuatro meses.
5. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco remitirá al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación y al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, el expediente completo para que emitan los informes correspondientes.
6. Cuando en el trámite de información pública al que se refiere el apartado anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de quince días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.
7. A la vista de la documentación presentada, del resultado del trámite de información pública y de los informes antes citados, el órgano ambiental Comunidad Autónoma del País Vasco elaborará una propuesta de resolución que someterá a un trámite de audiencia para el interesado por un plazo de 10 días.
8. Cuando en el trámite de audiencia al que se refiere el apartado anterior se hubiesen realizado alegaciones, se dará traslado de las mismas, junto con la propuesta de resolución, a los órganos que hayan emitido los informes sobre los que se hayan formulado alegaciones, para que, en el plazo máximo de 10 días, manifiesten, en su caso, lo que estimen oportuno.
9. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de cuatro meses. Transcurrido dicho plazo de cuatro meses sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.
10. Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos en el artículo 47 de esta Ley.



Artículo 46. Procedimiento de modificación no sustancial de las autorizaciones ambientales únicas.

1. Recibida por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la comunicación y documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación en los términos del artículo 29 de la presente Ley, se procederá a su valoración para confirmar dicho carácter no sustancial y, en caso afirmativo, se adaptará la autorización anteriormente concedida.
2. Dicha adaptación será notificada al titular y será objeto de publicidad activa a través del sistema de información ambiental del País Vasco dependiente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
3. Transcurridos 30 días sin que medie pronunciamiento del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco el titular de la actividad o instalación podrá llevarla a cabo en los términos expuestos en su comunicación.

Artículo 47. Comunicación de inicio de funcionamiento o apertura.

1. Con carácter previo al inicio de una actividad sometida a autorización ambiental integrada o autorización ambiental única será necesaria la presentación de una comunicación por parte del titular de la autorización ante el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y ante el ayuntamiento donde se ubica la instalación en la que acredite bajo su responsabilidad que la instalación se ajusta al proyecto aprobado y manifieste su compromiso para mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas.
2. Dicha comunicación se realizará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en registros sectoriales que procedan.
3. La comunicación deberá acompañarse de un certificado suscrito por persona técnica competente, según el tipo de actividad objeto de autorización, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionamiento fijado en la autorización ambiental integrada o autorización ambiental única.
4. La presentación de la citada comunicación habilita a partir de ese momento para el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección por parte de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales.
5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su



no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurren.

6. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

CAPÍTULO IV. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA

Artículo 48. Licencia de actividad clasificada.

1. Está sometida al régimen de licencia municipal de actividad clasificada la explotación de actividades e instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I.C de la presente Ley. Esta licencia precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en dichas instalaciones.
2. La persona física o jurídica que pretenda la explotación, traslado o modificación sustancial de una actividad clasificada deberá solicitar previamente al ayuntamiento en cuyo término municipal pretenda ubicar dicha actividad la licencia de actividad clasificada con arreglo al procedimiento previsto en esta Ley.
3. Como criterios interpretativos para determinar o no la sustancialidad de la modificación de una actividad clasificada se utilizarán los dispuestos en el artículo 29 de la presente Ley.
4. Los ayuntamientos podrán desarrollar vía ordenanza procedimientos para la tramitación de las modificaciones sustanciales o no sustanciales de las licencias de actividad clasificada otorgadas.

Artículo 49. Solicitud de la licencia de actividad clasificada.

1. La solicitud de licencia de actividad clasificada se presentará ante el ayuntamiento y deberá acompañarse de un proyecto técnico y una memoria descriptiva en los que se detallarán las características de la actividad, la descripción del medio sobre el que se emplace, su posible repercusión ambiental



y las medidas correctoras que se propongan utilizar con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad.

2. El órgano competente del ayuntamiento comprobará la pertinencia de la documentación presentada y, si ésta fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para que la complete en el plazo de diez días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en la legislación básica estatal sobre procedimiento administrativo.
3. En el supuesto de que el proyecto esté sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental ya sea ordinaria o simplificada, deberá acompañarse del estudio de impacto ambiental o el documento ambiental, en su caso.

Artículo 50. Información pública y emisión de informes.

1. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico o en las Ordenanzas Municipales, el Ayuntamiento someterá la solicitud a información pública mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial correspondiente y en la sede electrónica de dicha institución.
2. El período de información pública será de 30 días al objeto de que puedan presentarse alegaciones. Asimismo, se incorporarán al expediente aquellos informes técnicos que resulten necesarios según la naturaleza de la actividad a todos aquéllos órganos que en virtud de sus competencias deban pronunciarse, y que deberán emitirse en el plazo de 15 días tras el trámite de información pública.

Artículo 51. Informe de imposición de medidas correctoras.

1. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, deberán solicitar informe de imposición de medidas correctoras al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. Dicho informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante, caso de ser obstativo, incluirá las medidas correctoras ambientales que sean exigibles al objeto de compatibilizar la actividad con el entorno.
2. Los municipios de más de 10.000 habitantes, podrán solicitar el informe señalado en el apartado anterior al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente. En caso de no solicitarse dicho informe, serán



los propios municipios quiénes fijen las medidas correctoras y condiciones ambientales de la actividad o instalación sujeta a licencia de actividad clasificada.

3. El órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente deberá emitir el citado informe en el plazo máximo de quince días desde su solicitud por parte del Ayuntamiento.
4. En el caso de que la actividad o instalación esté sujeta a evaluación ambiental, no será necesario el citado informe que será suplido por la declaración o informe ambiental que en su caso se dicte por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 52. Concesión de la licencia de actividad.

1. A la vista de la documentación presentada, las alegaciones y los informes, el ayuntamiento deberá resolver y notificar el otorgamiento o la denegación de la licencia en el plazo máximo de 4 meses desde la presentación de la solicitud con la documentación completa.
2. El otorgamiento de la licencia se notificará personalmente a los interesados, a los distintos órganos que hubiesen emitido informe, se comunicará a quienes hubiesen presentado alegaciones durante el trámite de información pública y se hará público en la sede electrónica del ayuntamiento correspondiente.
3. Transcurrido el plazo de 4 meses sin que se haya dictado la resolución, podrá entenderse desestimada la solicitud de licencia de actividad clasificada.
4. Los ayuntamientos tendrán el deber de informar al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al órgano con competencias ambientales de la Diputación Foral correspondiente, en el supuesto de que haya emitido informe de imposición de medidas correctoras, de la concesión de licencias de actividad clasificada, de sus modificaciones sustanciales y del cese definitivo de la actividades e instalaciones previamente autorizadas.
5. Los ayuntamientos mantendrán un registro de las actividades e instalaciones sujetas a licencia de actividad clasificada que se desarrollen en su término municipal.
6. Corresponde al ayuntamiento otorgante, la comprobación, vigilancia, inspección y sanción de las actividades sometidas a licencia de actividad clasificada. Para el ejercicio de estas funciones podrán recabar la asistencia técnica de la Diputación Foral.



Artículo 53. Comunicación de inicio de actividad clasificada o apertura.

1. El inicio de la actividad requerirá la presentación por parte del promotor de una comunicación ante el ayuntamiento en la que bajo su responsabilidad acredite que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad clasificada y su compromiso para mantener el cumplimiento de las condiciones impuestas.
2. Dicha comunicación se realizará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, comunicaciones o inscripción en los registros sectoriales que procedan.
3. La comunicación deberá acompañarse de un certificado suscrito por técnico competente, según el tipo de actividad objeto de licencia, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la licencia de actividad clasificada.
4. La presentación de la comunicación previa habilita a partir de ese momento para el ejercicio efectivo de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección por parte de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales.
5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.
6. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

Artículo 54. Revisión de la licencia de actividad clasificada.

1. La licencia de actividad clasificada podrá ser revisada de oficio cuando:
 - a) La contaminación producida por la actividad o instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión o la determinación de nuevos valores.



- b) Se produzca una variación importante en los valores límite de inmisión del medio receptor.
 - c) Así lo exija la seguridad de la instalación o actividad, o la aplicación de nuevas normas.
2. La revisión de la licencia de actividad clasificada no dará derecho a indemnización.

CAPÍTULO V. COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Artículo 55. Comunicación previa de actividad clasificada.

1. Quedan sometidas al régimen jurídico de comunicación previa de actividad clasificada la construcción, montaje, explotación y modificación de las instalaciones, públicas o privadas, en las que se desarrollen las actividades que se relacionan en anexo I.D de esta Ley.
2. Corresponde al ayuntamiento la comprobación, vigilancia, inspección y sanción de las actividades sometidas a comunicación previa de actividad clasificada. Para ejercer estas funciones podrán recabar la asistencia técnica de la Diputación Foral correspondiente.

Artículo 56. Presentación de la comunicación previa de actividad clasificada.

1. La comunicación previa de actividad clasificada se presentará cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripción en los registros sectoriales que procedan.
2. Si la actividad pretendida no requiere ejecutar obras en los locales en los que se vaya a desarrollar, la eficacia de la comunicación estará supeditada a la compatibilidad urbanística de la actividad que pretenda llevarse a cabo en tales instalaciones.
3. Cuando la actividad sujeta a comunicación previa de actividad clasificada deba someterse a evaluación ambiental, dicha comunicación se presentará tras haberse dictado la correspondiente declaración o informe ambiental favorable.



Artículo 57. Contenido y efectos de la comunicación previa de actividad clasificada.

1. La comunicación previa de actividad clasificada deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
 - a) Proyecto o memoria en el que se describa la actividad y sus principales efectos o impactos ambientales, especialmente en materia de emisiones, vertidos, residuos, suelos y contaminación acústica.
 - b) Certificado suscrito por técnico competente, según el tipo de actividad objeto de la comunicación, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto o memoria presentados y que se da cumplimiento a los requisitos de la normativa ambiental sectorial que le sean de aplicación.
 - c) Copia, en su caso, de la declaración de impacto ambiental o informe ambiental favorable.
2. Una vez realizada la comunicación, podrá iniciarse el ejercicio de la actividad bajo la exclusiva responsabilidad de las personas físicas o jurídicas promotoras de la misma.
3. Las actividades o instalaciones sujetas a comunicación previa de actividad clasificada deberán cumplir los valores límite de emisión determinados en las prescripciones técnicas de la legislación ambiental que les sean de aplicación y, en su caso, las previstas en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental.
4. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación previa o su no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurren.
5. La resolución administrativa que declare tales hechos podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto por un plazo máximo de un año.

Artículo 58. Modificación de la actividad.

1. El traslado, la transmisión y cualquier modificación que afecte a las características, procesos productivos, al funcionamiento o la extensión de la



instalación será objeto de comunicación al Ayuntamiento, salvo que la modificación de la actividad conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en esta Ley para tal régimen.

2. Cuando la modificación sea considerada sustancial por el titular y no conlleve el cambio en el régimen de intervención aplicable deberá realizarse una nueva comunicación previa de actividad clasificada según lo descrito en el artículo anterior.
3. Como criterios interpretativos para determinar la sustancialidad o no de la modificación se podrán utilizar los dispuestos en el artículo 29 de la presente Ley.

TITULO QUINTO EVALUACIÓN AMBIENTAL.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo 59. Evaluación Ambiental.

1. Se someterán preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible, mediante:
 - a) La integración de los aspectos ambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.
 - b) El análisis y selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables.
 - c) El establecimiento de medidas que permitan prevenir, corregir, y en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
 - d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con la finalidad de la evaluación ambiental.
2. Los planes, programas y proyectos deberán someterse al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental de forma previa a su aprobación, autorización, o adopción definitiva por parte de la Administración pública competente.
3. Sin perjuicio del régimen que resulte de aplicación a las modificaciones, no deberán someterse a evaluación ambiental los proyectos que cuenten con alguna habilitación administrativa vigente.



Artículo 60. Procedimientos de evaluación ambiental.

1. El tipo de evaluación al que deben someterse los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones, será adecuado al grado de probabilidad con que dichos planes, programas y proyectos puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En consecuencia, se establecen los siguientes procedimientos de evaluación ambiental:

- a) Evaluación ambiental estratégica ordinaria de los planes y programas, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un alto grado de probabilidad.
- b) Evaluación ambiental estratégica simplificada de los planes y programas, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con un grado indeterminado de probabilidad.
- c) Evaluación de impacto ambiental ordinaria de los proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y se encuentren recogidos en el anexo II.C de esta Ley.
- d) Evaluación de impacto ambiental simplificada de los proyectos, y sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y se encuentren recogidos en el anexo II.D de esta Ley.
- e) Determinación del alcance de la evaluación de los planes y programas que deban someterse al procedimiento ordinario.
- f) Determinación del alcance de la evaluación de los proyectos que deban someterse al procedimiento ordinario.

2. Los planes, programas y proyectos que deben someterse a evaluación ambiental se detallan en el anexo II de la presente Ley.

Artículo 61. Competencias.

1. Corresponde al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco la emisión de las declaraciones e informes con los que concluyen los



procedimientos de evaluación ambiental, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración General del Estado por la normativa básica.

2. No obstante, en aquellos casos en los que la competencia sustantiva para la aprobación definitiva o para la autorización del plan, programa o proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, reside en los órganos forales de los Territorios Históricos, la competencia reconocida al órgano ambiental en el apartado anterior queda atribuida a estos últimos, excepto cuando el plan, programa o proyecto supere o afecte al ámbito territorial de más de un Territorio Histórico, supuesto en el que se garantizará la participación en el procedimiento de los órganos forales.
3. Los órganos ambientales a los que se refieren los párrafos anteriores ostentarán, respecto a los planes, programas y proyectos para los que les corresponda emitir las declaraciones e informes de evaluación ambiental, las competencias que esta Ley prevé para la determinación previa del alcance de la evaluación y de la documentación, para la exención de dicho procedimiento, y para establecer la vigencia de las declaraciones e informes ambientales.

Artículo 62. Nulidad de planes y proyectos no evaluados.

Serán nulos de pleno derecho los actos de adopción, aprobación, autorización, declaración responsable o comunicación previa, de los planes, programas y proyectos, y sus modificaciones, cuando, estando sometidos dichos planes, programas o proyectos a evaluación ambiental, dichos actos se hayan emitido sin haberse culminado el procedimiento de evaluación ambiental que les sea de aplicación, sin perjuicio, de las sanciones que, en su caso, procedan.

Artículo 63. Capacidad técnica y responsabilidad.

1. El promotor garantizará que los documentos técnicos necesarios para las evaluaciones ambientales sean realizados por personas que posean la capacidad técnica suficiente, de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior y que tengan la calidad y exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de esta ley y, en su caso, para ajustarse al alcance de la evaluación establecido por el órgano ambiental. Con esta finalidad deberá identificarse a su autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada.



2. Los autores de los citados documentos y el promotor serán responsables solidarios de su contenido y de la fiabilidad de la información, excepto en lo que se refiere a los datos recibidos de la administración de forma fehaciente.

Artículo 64. Confidencialidad.

1. Las Administraciones públicas que intervengan en los procedimientos de evaluación ambiental deberán respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor que, de conformidad con la normativa aplicable tengan dicho carácter teniendo en cuenta, en todo caso, la protección del interés público.
2. El promotor deberá indicar qué parte de la información contenida en la documentación presentada considera que debería gozar de confidencialidad. La Administración competente decidirá sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la información amparada por la confidencialidad, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.
3. En el supuesto de que se deniegue total o parcialmente el carácter confidencial de la información indicada por el promotor se deberá emitir una resolución motivada con indicación de los recursos que correspondan.

Artículo 65. Planes y programas excluidos de evaluación ambiental.

1. Los procedimientos de evaluación ambiental estratégica no serán de aplicación en los siguientes casos:
 - a) Cuando los planes, programas o proyectos tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia y la aplicación del procedimiento pueda tener repercusiones negativas sobre los objetivos de defensa nacional o de protección civil.
 - b) Cuando los planes y programas sean únicamente de tipo financiero o presupuestario.



- c) Cuando, debido a la escasa envergadura de las acciones que puedan derivarse de los planes, programas y proyectos, o de sus modificaciones, los efectos que puedan producir en el medio ambiente no sean significativos de forma manifiesta.
2. El Órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá establecer criterios para determinar en qué situaciones puede considerarse que los posibles efectos de un plan o programa, o de una modificación de un plan o programa, sobre el medio ambiente no van a ser significativos.
 3. La evaluación ambiental estratégica de los planes y programas no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de los que aquéllos sean marco.

Artículo 66. Proyectos exceptuables de evaluación ambiental.

1. En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá exceptuar, mediante acuerdo motivado, a alguno de los proyectos recogidos en el anexo II de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental regulado en esta Ley. En tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta Ley. El citado acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y notificado a la Comisión Europea.
2. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la hayan justificado, así como el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido.

Artículo 67. Determinación del alcance de las evaluaciones ambientales ordinarias.

1. El órgano competente determinará el alcance de la evaluación de los planes, programas y proyectos que deban someterse a un procedimiento ordinario, y,



cuando sea necesario, detallará el contenido de los documentos ambientales que deban incorporarse al procedimiento, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

2. En el caso de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el alcance de la evaluación y el contenido de la documentación que deba incorporarse a los expedientes será adecuada y proporcionada al grado de detalle del plan o programa del que se trate. Será coherente con el tipo de efectos esperados y proporcional a la magnitud de dichos efectos.
3. Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de decisión, el alcance de la evaluación ambiental en cada uno de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase de decisión en la que se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de actuaciones.
4. En el caso de la evaluación de impacto ambiental ordinaria de aquellos proyectos cuyos posibles efectos ambientales sean de carácter simple o bien conocidos, o bien cuando se hayan emitido instrucciones técnicas suficientes para la evaluación de determinados tipos de proyectos, podrá eximirse del pronunciamiento previo del órgano ambiental en cuanto al alcance de la evaluación y de la documentación, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 68. Publicidad.

Las declaraciones ambientales estratégicas y de impacto ambiental se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente y en su sede electrónica. Dicha publicación se comunicará también al público interesado en tales procedimientos de evaluación. En particular, se notificarán al promotor del Plan o proyecto y se remitirán al órgano administrativo competente para aprobar el plan y, en su caso, autorizar el proyecto de que se trate que caso de estar además sometido a autorización ambiental será conjunto.

Artículo 69. Resolución de discrepancias.



En caso de discrepancia entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo sobre el contenido de la declaración o del informe de impacto ambiental, resolverá el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco o en su caso, de la Diputación Foral.

Artículo 70. Relaciones intercomunitarias y transfronterizas.

1. En el supuesto de actuaciones sometidas a evaluación ambiental que, teniendo lugar en otra Comunidad Autónoma, pudieran tener efectos ambientales significativos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, esta última solicitará de aquella Comunidad información sobre dicha actividad. Asimismo, en el supuesto de que una actividad desarrollada en la Comunidad Autónoma del País Vasco tenga efectos significativos sobre el medio ambiente de otra Comunidad Autónoma colindante, aquélla procederá a facilitar información sobre dicha actividad.
2. En el supuesto de que la ejecución de las actuaciones contempladas en el Anexo II de esta ley pudiera causar efectos transfronterizos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco facilitará a las autoridades competentes del territorio afectado el estudio ambiental estratégico o, en su caso, el estudio de impacto ambiental que a tal efecto se elabore para que formule las alegaciones o consideraciones que estime oportunas, y, posteriormente, se le enviará copia de la resolución o informe definitivo, todo ello a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria y a lo regulado por las normas estatales.

Artículo 71. Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental.

1. Se crea el Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental a los efectos de garantizar la participación efectiva de las personas interesadas en los citados procedimientos que deban ser consultadas según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación ambiental. El Registro dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Podrán solicitar la inscripción en este registro cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro, constituidas con al menos dos años de antigüedad que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan



resultar afectados por la toma de una decisión en su ámbito territorial de actuación. La inscripción será voluntaria y no necesaria para el público interesado que podrá concurrir en el procedimiento concreto en el que ostente tal condición.

3. Reglamentariamente se regulará la organización, funcionamiento y acceso al Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental.

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS

Artículo 72. Ámbito de la evaluación ambiental estratégica.

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria, los planes y programas, así como sus modificaciones, enumerados en el anexo II.A, que se adopten por una Administración Pública y cuya elaboración venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, los planes y programas, así como sus modificaciones, enumerados en el anexo II.B, que se adopten por una Administración Pública y cuya elaboración venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Artículo 73. Naturaleza y contenido de la Declaración Ambiental Estratégica.

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria concluirá con una declaración ambiental estratégica emitida por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.
2. La declaración ambiental estratégica contendrá un resumen de los principales hitos del procedimiento, las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa que se apruebe o adopte y las directrices generales para la evaluación ambiental a la que deban someterse, en su caso, los planes jerárquicamente inferiores y los proyectos contemplados en los planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
3. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se ha procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de



evaluación ambiental del plan o programa, salvo que solicite la prórroga del de la vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia de la declaración ambiental estratégica en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 74. Naturaleza y contenido del Informe Ambiental Estratégico.

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada concluirá con un informe ambiental estratégico emitido por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. El informe ambiental estratégico tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.
2. El informe ambiental estratégico contendrá un resumen de los principales hitos del procedimiento y la determinación de si el plan o programa debe someterse o no a una evaluación ambiental estratégica ordinaria.
4. Cuando el informe concluya determinando que el plan o programa no debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano competente establecerá en dicho informe los términos en los que deba adoptarse el plan o programa para garantizar que el plan o programa no pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
5. El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del plan o programa, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia del informe ambiental estratégico en los términos que se determinen reglamentariamente.

CAPÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

Artículo 75. Naturaleza y contenido de la Declaración de Impacto Ambiental.

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria concluirá con una declaración de impacto ambiental emitida por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.
2. La declaración de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos del procedimiento y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que



puede desarrollarse incluyendo las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y de seguimiento que deban adoptarse.

3. La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 76. Naturaleza y contenido del Informe de Impacto Ambiental.

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada concluirá con un informe de impacto ambiental emitido por el órgano competente de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. El informe de impacto ambiental tendrá la naturaleza de un informe preceptivo y vinculante.
2. El informe de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos del procedimiento y la determinación de si el proyecto debe someterse o no a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3. Cuando el informe concluya determinando que el proyecto no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano competente establecerá en dicho informe los términos en los que el proyecto deba ser aprobado para garantizar que el proyecto no pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
4. El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que les son propios si tras su publicación no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que solicite la prórroga de su vigencia al órgano ambiental. En este supuesto, el órgano ambiental otorgará, en su caso, un nuevo plazo de vigencia del informe de impacto ambiental en los términos que se determinen reglamentariamente.



TÍTULO SEXTO. INSTRUMENTOS DE IMPULSO DE LA MEJORA AMBIENTAL

Artículo 77. Acuerdos medioambientales.

1. Las Administraciones públicas promoverán la suscripción de acuerdos para lograr la participación de todas las instancias de la sociedad en la protección del medio ambiente, bajo el principio de responsabilidad compartida.
2. Los acuerdos que se suscriban deberán establecer objetivos en el marco de los principios del artículo 3 de esta Ley, plazos para su consecución y sistemas para el seguimiento de sus resultados.
3. Las administraciones públicas deberán publicitar los acuerdos que suscriban, manteniendo actualizada y disponible al público la información que obre en su poder sobre ellos en las condiciones establecidas en el Título III de esta Ley.

Artículo 78. Fomento de la participación en el sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS).

1. Las Administraciones públicas promoverán la adhesión voluntaria de las organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco al sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS) regulado por el Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
2. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán medidas dirigidas a:
 - a) Informar sobre los objetivos y requisitos del sistema
 - b) Apoyar a las pequeñas y medianas organizaciones.
 - c) Facilitar un enfoque gradual que conduzca a la adhesión al sistema.
 - d) Considerar la adhesión al sistema en la elaboración de legislación y en su aplicación y cumplimiento en aras a reducir y suprimir requisitos normativos.
 - e) Incorporar en los procedimientos de contratación pública la adhesión al sistema de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector público.
3. El departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsará la colaboración con sindicatos, asociaciones patronales, asociaciones de



consumidores, organizaciones para la defensa del medio ambiente, instituciones locales y otras partes interesadas para promover la adhesión al sistema EMAS en el País Vasco.

4. El departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la utilización de otros sistemas de gestión ambiental como medio para posibilitar la adhesión al sistema EMAS.
5. Los requisitos para acreditar las equivalencias entre los sistemas señalados en el apartado anterior serán los que establezca la Comisión Europea de conformidad con lo que a tal fin establece el artículo 45 del Reglamento (CE) 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 y el anexo II del mismo.

Artículo 79. Fomento de la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

1. Las Administraciones públicas promoverán la utilización de la etiqueta ecológica de la Unión Europea regulada por el Reglamento (CE) 66/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
2. A fin de promover la utilización de la etiqueta ecológica se adoptarán medidas dirigidas a:
 - a) Sensibilizar e informar sobre los beneficios de la utilización de la etiqueta ecológica.
 - b) Informar sobre los productos y servicios etiquetados y sobre sus lugares de venta o prestación.
 - c) Incorporar en los procedimientos de contratación pública la utilización de la etiqueta ecológica de acuerdo con lo que en esta materia establece la normativa sobre contratos del sector público.
3. El departamento competente en materia de medio ambiente del Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, impulsará la colaboración con asociaciones de consumidores, fabricantes, prestadores de servicios, comerciantes, asociaciones patronales, sindicatos y otras partes interesadas con el objeto de facilitar la adopción de las acciones señaladas en el apartado anterior.



Artículo 80. Huella ambiental.

Las Administraciones Públicas promoverán la utilización en sus políticas de las metodologías reconocidas por la Unión Europea con el objetivo de medir y comunicar el comportamiento ambiental de productos u organizaciones en el ciclo de vida.

Artículo 81. Compra Pública Verde.

1. La compra y contratación pública verde tendrá como finalidad optimizar la coordinación con el mercado para garantizar que aquella incorpore la ecoinnovación y facilitar, a su vez que las Administraciones públicas hagan un uso más eficiente de los recursos.
2. Los órganos de contratación de las Administraciones públicas y de los demás entes del sector público incluirán en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares de sus contratos de obras, servicios y suministros criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución y cláusulas o condiciones que contribuyan a alcanzar los objetivos que se establecen en esta Ley. Se promoverá especialmente la utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización. A tal efecto, las administraciones públicas en el marco de sus competencias adaptarán sus instrucciones técnicas y documentos análogos para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.
3. En los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para la ejecución de contratos de obras y suministros se indicarán los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40%, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.
4. Asimismo, deberán establecerse los mecanismos de control adecuados y, en su caso, las cláusulas de penalización oportunas para garantizar el debido cumplimiento de las cláusulas ambientales establecidas en los pliegos y de las condiciones de ejecución previstas en el contrato. A tal efecto, a la finalización de los contratos ejecutados deberán adjuntar justificación documental relativa a la utilización de los citados materiales.



5. Lo previsto en este artículo se llevará a cabo de conformidad con lo que establece la legislación sobre contratos del sector público.

Artículo 82. Ecoinnovación.

1. Las Administraciones públicas impulsarán la ecoinnovación empresarial de producto y de proceso que permita aprovechar las oportunidades de mercado que genera el medio ambiente.
2. A tales efectos, el departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverá la introducción de tecnologías ambientalmente más eficaces en las actividades económicas. Para ello aprobará y actualizará periódicamente un listado de tecnologías cuyo uso podrá ser incluido en los contratos del sector público y también podrá ser considerado como criterio preferente tanto en el establecimiento de beneficios fiscales, como en la concesión de subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la mejora ambiental.

Artículo 83. Fiscalidad ambiental.

1. Las Administraciones públicas vascas promoverán, en el ámbito del órgano de coordinación tributaria de Euskadi y de acuerdo con las normas reguladoras del mismo y previa consulta al Departamento con competencias ambientales de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el uso de la fiscalidad ecológica y de otros instrumentos de política económica ambiental para contribuir a los objetivos de la presente Ley.
2. Las recaudaciones obtenidas tendrán un carácter finalista destinándose exclusivamente a la realización de los objetivos previstos en esta Ley.
3. Los ingresos recaudados por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco integrarán una partida presupuestaria en sus respectivos Presupuestos Generales del año siguiente con afectación específica a los objetivos fijados por el órgano que ostente la competencia en materia ambiental en cada una de ellas.
4. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán establecer en el ámbito de sus competencias, entre otras, las siguientes medidas fiscales y financieras:



- a) La creación de tasas por la emisión de las autorizaciones, licencias y la recepción de comunicaciones previas o declaraciones responsables contempladas en la presente Ley.
- b) La creación de tributos u otros instrumentos fiscales que graven el desarrollo de las actividades que provoquen afecciones al medio ambiente.
- c) El establecimiento de reducciones, bonificaciones o exenciones para las actividades que fomenten actuaciones que tengan por finalidad cumplir con los objetivos de esta Ley y, en especial, aquellas que fomenten la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos.

Artículo 84. Investigación, educación y formación.

1. A fin de mejorar la base de conocimiento sobre el medio ambiente los agentes públicos y privados compartirán y promoverán los esfuerzos de investigación en el marco de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología transfiriendo sus avances a las políticas públicas ambientales.
2. Las Administraciones públicas impulsarán la educación y la sensibilización ambiental en todos los sectores sociales, mediante actuaciones que difundan y extiendan en la ciudadanía y en el conjunto de las instituciones, conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la mejora ambiental. Con tal finalidad, el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en coordinación con otras Administraciones públicas elaborará programas de actuación en materia de educación y sensibilización ambiental con objetivos específicos y medidas concretas para alcanzarlos.
3. Asimismo, las Administraciones públicas impulsarán la formación ambiental del personal a su servicio y, en colaboración con los agentes sociales, el de todos los trabajadores para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y promover valores y actuaciones de mejora ambiental.

Artículo 85. Voluntariado ambiental.

1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco promoverán, en el ámbito de sus competencias, la participación de la ciudadanía en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general en favor de la protección y mejora del medio ambiente, de acuerdo con lo



establecido en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y el resto de normativa de aplicación. A tal efecto, diseñarán programas para el desarrollo de actividades de conservación, restauración de la naturaleza y educación ambiental destinados a su realización por voluntarios, en aquellos centros y materias en los cuales su colaboración resulte idónea a los fines perseguidos por esta Ley.

2. Con el fin de fomentar y facilitar la acción de voluntariado ambiental, las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollarán las actuaciones de fomento previstas en la Ley 17/1998, de 25 de junio, de voluntariado y, especialmente, las siguientes:

- a) La puesta en común de recursos y medios entre las organizaciones que cuenten con voluntarios y voluntarias sobre todo en materia de formación y recogida de información.
- b) El otorgamiento de ayudas y la suscripción de convenios para el mantenimiento, la formación y la acción de las organizaciones de voluntarios y voluntarias.
- c) La organización de campañas de información sobre voluntariado ambiental.
- d) La prestación de servicios de asesoramiento, información y apoyo técnico a las organizaciones.
- e) La aplicación de bonificaciones en el uso de medios públicos de transporte o en la entrada a espectáculos y equipamientos culturales de iniciativa pública.
- f) El establecimiento de medidas en el marco de la normativa laboral y fiscal.
- g) La implantación de medidas honoríficas para reconocer públicamente el trabajo voluntario.



Artículo 86. Medidas de reconocimiento público.

Con el fin de reconocer públicamente a la ciudadanía y organizaciones que contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco distinguirá con medidas de tipo honorífico dichas actuaciones con la periodicidad, ámbitos y categorías que reglamentariamente se establezcan.

TÍTULO SÉPTIMO. INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. CAPÍTULO I. ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL.

Artículo 87. Entidades de colaboración ambiental.

1. Las entidades de colaboración ambiental son aquellas personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, que colaboran con las Administraciones públicas competentes en materia de medio ambiente, para el desempeño de las actuaciones de verificación, validación y control de las actividades.
2. Las entidades de colaboración ambiental, a instancia de las Administraciones públicas, desarrollarán las siguientes funciones:
 - a) Validación documental de los requisitos y datos necesarios para la solicitud de autorizaciones ambientales, licencias, comunicaciones y declaraciones responsables, renovaciones y modificaciones de las anteriores, tramitación de subvenciones y cualesquiera otros documentos vinculados a trámites contemplados en la presente Ley.
 - b) Verificación en dependencias de la actividad de la adecuación de los equipos e instalaciones a los requisitos establecidos en dichas autorizaciones o licencias, tramitaciones administrativas o en la normativa ambiental aplicable.
 - c) Toma de muestras, mediciones y análisis para la evaluación de conformidad de los distintos controles y verificaciones de funcionamiento de la actividad.
3. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco registrará a las entidades que lo soliciten, de conformidad con los requisitos necesarios y el procedimiento que reglamentariamente se establezca, así como las medidas que



garanticen su independencia e imparcialidad. Dicho registro dependerá del departamento competente en materia de medio ambiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y contendrá los datos identificativos de cada una de las entidades de colaboración ambiental inscritas, el nivel de actividad y alcance de su actuación.

CAPITULO II. INSPECCIÓN AMBIENTAL.

Artículo 88. Finalidad de la inspección ambiental y competencias inspectoras.

1. La inspección ambiental tiene por finalidad garantizar la adecuación a la legalidad ambiental de las actividades sometidas a esta Ley, así como verificar el cumplimiento y la eficacia de las condiciones establecidas en las autorizaciones y licencias o comunicadas por los propios promotores.
2. Corresponde a las Administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, llevar a cabo la vigilancia e inspección ambiental sobre las actividades, actuaciones e instalaciones, públicas o privadas, incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Artículo 89. Personal de la inspección ambiental.

1. Las labores de control, vigilancia e inspección ambiental podrán realizarse directamente por el personal al servicio de las Administraciones públicas que sea designado a tal efecto o por entidades o personas que demuestren la capacidad técnica adecuada para la realización, en nombre de las Administraciones públicas, de actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a funcionarios públicos por entrañar el ejercicio de potestades públicas o por otras circunstancias.
2. El personal funcionario de las Administraciones públicas que sea oficialmente designado para realizar la actividad de inspección ambiental dispone de la consideración de agente de la autoridad para el ejercicio de las funciones que le son propias.
3. El personal inspector está facultado para recabar la exhibición de cualquier documentación ambiental obrante en poder de los sujetos sometidos a esta Ley, así como para acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las instalaciones y demás lugares en que se desarrollen las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando para el ejercicio de sus



funciones inspectoras fuera precisa la entrada en un domicilio deberá solicitarse la oportuna autorización judicial.

Artículo 90. Informe y acta de inspección.

1. En el transcurso de la visita de inspección se levantará un acta descriptiva de los hechos, haciéndose constar las condiciones en las que se desarrolla la actividad, en su caso, las irregularidades observadas y las alegaciones que formule la persona responsable de los mismos. Asimismo, en el caso de que durante la visita de inspección se proceda a la toma de muestras o a la realización de mediciones, se deberá asegurar que estas actuaciones se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en las instrucciones técnicas aprobadas a tal fin.
2. Las actas que el personal inspector extienda en el ejercicio de sus facultades tendrán valor probatorio de los hechos que recojan, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas.
3. Después de cada vista de inspección a actividades sujetas a los regímenes de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única se elaborará un informe en el que se recogerán las conclusiones pertinentes respecto al cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y de los requisitos establecidos en la normativa, así como respecto de cualquier ulterior actuación necesaria. Esta actuación será potestativa en el caso de inspecciones a actividades sujetas a otros regímenes de intervención ambiental previstos en esta Ley.
4. Cuando así lo exija la normativa sectorial correspondiente y de acuerdo, en todo caso, con lo establecido en la normativa sobre acceso del público a la información medioambiental, las Administraciones públicas pondrán a disposición de la ciudadanía por medios electrónicos los informes relativos a las inspecciones realizadas en el plazo de cuatro meses a partir de la visita.
5. El informe de la visita de inspección se notificará al titular de la actividad en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que tenga lugar la visita.
6. Los hechos que se constaten y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan aportar las personas interesadas.



Artículo 91. Deber de sometimiento a la actuación inspectora.

1. Los titulares de las actividades sujetas a esta Ley están obligados a prestar la colaboración necesaria al personal de la inspección ambiental a que se refiere el artículo 89, a fin de permitirle realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los titulares de las actividades sujetas a esta Ley al proporcionar la información que sea obligatoria podrán señalar los aspectos de la misma que, a su juicio, tengan carácter confidencial en lo relativo a los procesos industriales y otros cuya confidencialidad esté reconocida legalmente.

Artículo 92. Planificación de la inspección ambiental.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán periódicamente planes de inspección ambiental que, como mínimo, deberán tener el siguiente contenido:
 - a) Área geográfica a la que es de aplicación.
 - b) Principales aspectos medioambientales.
 - c) Actividades sometidas a inspección.
 - d) Procedimientos para elaborar los programas de inspecciones ambientales.
 - e) Medios humanos destinados a las inspecciones.
 - f) Sistemas de coordinación con otras autoridades encargadas de las inspecciones.
 - g) Sistemas de evaluación del programa de inspecciones.
2. De acuerdo con los planes de inspección, las Administraciones públicas elaborarán regularmente programas de inspección ambiental prefijadas que incluyan la frecuencia o el número de visitas para los distintos tipos de actividad.
3. Los periodos entre visitas en instalaciones sujetas al régimen de autorización ambiental integrada se basarán en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales de las actividades y no superarán un año en aquellas



actividades que planteen los riesgos más altos y tres en las que se planteen riesgos menores.

4. La evaluación sistemática de los riesgos medioambientales citada en el apartado anterior se basará, al menos en los siguientes criterios, sin perjuicio de aquellos otros que se establezcan reglamentariamente:
 - a) La repercusión posible y real de las actividades sobre la salud humana y el medio ambiente y el riesgo de accidente.
 - b) El historial de cumplimiento de las condiciones de los títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad y de los requisitos establecidos en la normativa.
 - c) La participación del titular de la actividad en el Sistema de gestión y auditoría ambientales (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1221/2009.

Artículo 93. Publicidad de las actuaciones de inspección ambiental.

Los planes de inspección ambiental, los programas de inspección ambiental y sus evaluaciones y, los resultados de las actuaciones de inspección ambiental a actividades sujetas a los regímenes de autorización ambiental integrada y autorización ambiental única deberán ponerse a disposición del público, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y la legislación sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

TÍTULO OCTAVO. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES.

CAPÍTULO I. RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD AMBIENTAL

Artículo 94. Legalización de actividades sin autorización, licencia o comunicación previa.

1. Cuando una actividad se encuentre en funcionamiento sin la autorización, licencia o comunicación previa que sea preceptiva con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes para su otorgamiento o recepción de su comunicación previa podrán ordenar la adopción de las medidas previstas en los artículos siguientes y, además, llevarán a cabo alguna de las siguientes actuaciones:



- a) Si la actividad pudiese legalizarse, requerirá a su titular para que regularice su situación mediante el procedimiento de intervención ambiental que sea aplicable en cada caso, concediéndole para que inicie dicho procedimiento un plazo que, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, no podrá ser superior a un mes.
 - b) Si la actividad no pudiese legalizarse por incumplimiento de la normativa vigente aplicable procederá a su clausura definitiva.
2. Además de la legalización o de la clausura, se podrán ordenar la adopción de medidas correctoras o la reposición de la situación alterada cuando no se hubieran producido daños significativos al medio ambiente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 de este capítulo.
 3. En el caso de que se hayan producido daños ambientales significativos o de que exista una amenaza inminente de dichos daños se deberán adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños ambientales de conformidad con lo dispuesto en el capítulo siguiente.
 4. Las medidas y actuaciones anteriores se tomarán sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador previsto en el Título siguiente.

Artículo 95. Medidas correctoras.

Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad o instalación sometida a alguno de los regímenes de intervención ambiental previstos en esta Ley, las Administraciones públicas competentes para su otorgamiento o recepción, le requerirá para que corrija las deficiencias observadas, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97, en un plazo acorde con la naturaleza de las medidas correctoras que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.

Artículo 96. Suspensión de actividades.

Los Administraciones públicas competentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 97, podrán ordenar la adopción de medidas preventivas y de evitación, incluyendo la paralización de las actividades que se encuentren en fase de construcción o de explotación, total o parcialmente, por cualquiera de los siguientes motivos:

- a) Comienzo de la ejecución del proyecto de actividad o desarrollo de la misma sin contar con el correspondiente instrumento de intervención



ambiental, sin haber realizado el trámite de comunicación previa de actividad, o sin haber sustanciado el preceptivo procedimiento de evaluación ambiental.

- b) Ocultación de datos esenciales, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de intervención o evaluación ambiental que corresponda.
- c) Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas en el correspondiente instrumento de intervención o evaluación ambiental o de las condiciones notificadas en la comunicación previa de actividad clasificada.
- d) Existencia de una amenaza inminente de producción de daños medioambientales o para la salud de las personas, así como de que, una vez producidos puedan agravarse.

Artículo 97. Procedimiento de restauración de la legalidad ambiental.

1. La legalización de actividades, incluida la reposición de la situación alterada, la imposición de medidas correctoras y la suspensión de actividades podrán acordarse previa tramitación de un procedimiento de restauración de la legalidad ambiental o en el marco de un procedimiento administrativo sancionador.
2. El procedimiento de restauración de la legalidad ambiental deberá contemplar un trámite de audiencia al titular de la actividad y a los demás interesados, en su caso, por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, durante el cual podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
3. El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa se entenderá caducado el procedimiento.
4. En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de tramitar el procedimiento administrativo para fijar las medidas de prevención y evitación de daños o para exigir su adopción.
5. Iniciado el procedimiento de restauración de la legalidad ambiental, o con carácter previo en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, se podrán adoptar de forma motivada, las medidas provisionales que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.



6. Las medidas provisionales que pueden adoptarse son, además de la suspensión de actividades y las medidas correctoras a las que se refieren los artículos anteriores, las previstas para el procedimiento sancionador en esta Ley.
7. También podrá adoptarse como medida provisional la suspensión del suministro de agua o de energía eléctrica de aquellas actividades, instalaciones y obras a las que se haya ordenado su suspensión o clausura. Para ello, se notificará la oportuna resolución administrativa a las empresas suministradoras de agua o de energía eléctrica, que deberán cumplir dicho mandato en el plazo máximo de cinco días. La paralización de estos suministros sólo podrá levantarse cuando se haya levantado la suspensión de la actividad y así lo notifique la Administración actuante a las empresas suministradoras.
8. Asimismo, podrá exigirse a los titulares de las actividades o instalaciones la prestación de una fianza que garantice la efectividad de las medidas cautelares impuestas.

Artículo 98. Ejecución forzosa de las medidas de restauración de la legalidad ambiental.

1. La Administración pública competente, previo requerimiento, podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las medidas correctoras cuando el promotor o el titular de la actividad o instalación, tanto en funcionamiento como en situación de suspensión temporal, se niegue a adoptarlas, especialmente cuando exista una amenaza inminente de daños al medio ambiente o a la salud de las personas. Los gastos de la ejecución subsidiaria serán exigidos al promotor o al titular de la actividad por la vía de apremio.
2. Cuando no exista amenaza inminente de daños o el retraso en la adopción de las medidas no pongan en peligro el medio ambiente o la salud de las personas, la Administración pública competente podrá imponer sucesivamente multas coercitivas al promotor o al titular de la actividad o instalación cuando se nieguen a la adopción de las medidas correctoras. Cada multa coercitiva podrá tener hasta un importe máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en ejecución.

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Artículo 99. Responsabilidad por daños ambientales significativos y de su amenaza inminente.



1. La prevención, evitación y reparación de los daños ambientales significativos y las amenazas inminentes de los mismos ocasionados por actividades económicas o profesionales se llevará a cabo en la forma y condiciones previstas por la Directiva europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales y su normativa de transposición de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. La responsabilidad que se exija en aplicación de la normativa señalada en el apartado anterior es compatible con el régimen de restauración de la legalidad ambiental y con el régimen sancionador administrativo previstos en esta Ley o en otras leyes sectoriales, así como con la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido, aunque los hechos que la originen sean los mismos.
3. La responsabilidad por daños ambientales podrá ser establecida mediante el procedimiento específico previsto en la normativa a la que se refiere el apartado primero de este artículo o, en caso de concurrir una infracción administrativa, a través del correspondiente procedimiento sancionador.
4. Los operadores a los que así se requiera de acuerdo con la normativa de transposición de la Directiva de responsabilidad ambiental, deberán disponer, en su caso, de la garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad ambiental inherente a la actividad o actividades que desarrollen en el momento en que se indique, expresamente, en la autorización o licencia.

Artículo 100. Régimen competencial.

1. Corresponde al departamento competente en materia de medio ambiente del Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco la resolución de los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental por daños ambientales significativos cuando sea competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según lo dispuesto en la legislación básica aplicable, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado siguiente.
2. Las Administraciones públicas establecerán aquellos mecanismos de colaboración que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias establecidas en materia de prevención, evitación y reparación de los daños ambientales significativos y de su amenaza inminente. En todo caso, ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, de cooperación y de colaboración.



TÍTULO NOVENO. DISCIPLINA AMBIENTAL.

Artículo 101. Infracciones y sanciones.

1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley, las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las infracciones tipificadas en las normas con rango de Ley, de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que regulan sectorialmente dichas materias.
2. Las infracciones administrativas establecidas en esta Ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores.

Artículo 102. Tipificación de infracciones.

1. Las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves los siguientes hechos, cuando generen riesgos o daños de carácter grave al medio ambiente o a las personas y se realicen contraviniendo el ordenamiento jurídico:
 - a) La iniciación o ejecución de obras, proyectos y actuaciones sin haberse obtenido autorización ambiental única o licencia de actividad o sin haber realizado la oportuna comunicación previa de actividad clasificada o la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura.
 - b) No ajustarse a las condiciones impuestas en la autorización ambiental única o en la licencia de actividad o a las condiciones notificadas en la comunicación previa de actividad clasificada.
 - c) La inexactitud, falsedad u omisión de datos de carácter esencial exigidos en la documentación que se acompañe a la comunicación previa de actividad clasificada o la comunicación de inicio de funcionamiento o apertura o a las solicitudes de autorización ambiental única o de licencia de actividad clasificada.
 - d) El incumplimiento de la obligación de comunicar la transmisión de actividades o instalaciones sujetas a autorización, licencia o comunicación a la Administración competente para su otorgamiento o



para recepcionar la comunicación previa.

- e) La omisión de datos y la negativa a facilitar los que sean requeridos a titulares de actividades y la obstrucción, activa o pasiva, a la labor inspectora de la Administración.
 - f) La quema no autorizada de productos y de residuos a cielo abierto.
 - g) El incumplimiento de las condiciones exigidas a las entidades de colaboración y la realización por éstas de actividades contrarias a lo dispuesto en la normativa que les resulte de aplicación.
 - h) El incumplimiento de las medidas correctoras o de las medidas provisionales impuestas para la restauración de la legalidad ambiental.
3. Son infracciones graves las contempladas en el apartado anterior cuando no se generen riesgos o daños de carácter grave al medio ambiente o a las personas.
4. Son infracciones leves las señaladas en los apartados anteriores como muy graves o graves, cuando por su escasa incidencia sobre medio ambiente o las personas no se den los supuestos para dicha calificación.

Artículo 103. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior prescribirán en los siguientes plazos:
 - a) Cinco años en caso de infracciones muy graves.
 - b) Tres años en caso de infracciones graves.
 - c) Un año en caso de infracciones leves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En los supuestos de infracciones permanentes el plazo comenzará a contar desde que finalizó la conducta infractora. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.

Artículo 104. Sanciones.



1. Por la comisión de las infracciones administrativas previstas en el artículo 102 de esta Ley se podrán imponer las siguientes sanciones:
 - a) Para las infracciones muy graves
 - Multas entre 250.001 euros a 2.500.000 euros.
 - Clausura definitiva, total o parcial, de las actividades o instalaciones.
 - Clausura temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones por un período no inferior a dos años, ni superior a cinco.
 - Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año, ni superior a cinco.
 - Cese definitivo o temporal de las actividades o instalaciones por un periodo no superior a los cinco años.
 - Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año, ni superior a dos.
 - Pérdida definitiva de la condición de entidad colaboradora o pérdida temporal por un periodo no superior a seis años.
 - b) Para las infracciones graves.
 - Multa de 25.001 euros a 250.000 euros.
 - Clausura temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones por un periodo máximo de dos años.
 - Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo máximo de un año.
 - Cese temporal de las actividades o instalaciones por un periodo máximo de tres años.
 - Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año.
 - Pérdida de la condición de entidad colaboradora por un periodo máximo de tres años.
 - c) Para las infracciones leves
 - Multa de 600 euros a 25.000 euros.
 - Apercibimiento.
2. Las multas serán compatibles con las sanciones de apercibimiento, cese temporal y clausura temporal, total o parcial.



Artículo 105. Graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada, considerando especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción:

- a) La existencia de intencionalidad.
- b) La reiteración por la comisión de más de una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme.
- c) La reincidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza tipificada en esta Ley, cuando así haya sido declarado por resolución firme, en el plazo de cuatro años siguientes a la notificación de ésta.
- d) Los daños causados al medio ambiente o salud de las personas o el peligro creado para la seguridad de las mismas.
- e) El beneficio obtenido por la comisión de la infracción.
- f) La capacidad económica de la persona infractora.
- g) Como atenuante, la adopción con antelación a la incoación de un expediente sancionador de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente se deriven de una determinada actividad tipificada como infracción.

Artículo 106. Decomiso.

1. Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar el decomiso de los efectos provenientes de la infracción, de los instrumentos con los que se haya ejecutado, de los objetos que constituyan su soporte material y de las ganancias derivadas de la misma, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
2. El decomiso no podrá acordarse cuando los efectos o instrumentos pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los haya adquirido legalmente, salvo que exista un riesgo inminente de daño ambiental o de riesgo para la salud de las personas.



Artículo 107. Prescripción de las sanciones.

Las sanciones impuestas por las infracciones previstas en esta Ley prescribirán, en el caso de las muy graves, a los cinco años, las impuestas por las infracciones graves a los tres años, y las impuestas por las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 108. Competencias.

1. En las materias de competencia de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponderá el ejercicio de la potestad sancionadora al Consejo de Gobierno, por la comisión de las infracciones muy graves que conlleven una sanción de más de 1.500.000 € de multa o la clausura definitiva, total o parcial, de las actividades e instalaciones; al Consejero o Consejera competente en materia de medio ambiente, por la comisión de infracciones muy graves y al Vicesconsejero o Viceconsejera competente en materia de medio ambiente u órgano que lo sustituya por la comisión de las infracciones graves y leves.
2. En las materias de competencia foral y municipal, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos competentes de acuerdo con lo que dispongan al respecto sus normas de organización y funcionamiento.

Artículo 109. Medidas de carácter provisional.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo, por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora, podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento daños o de los riesgos de su producción para el medio ambiente y para la salud humana. Dichas medidas deberán ajustarse a los principios de efectividad y de menor onerosidad y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las presuntas infracciones, y podrán consistir en:



- a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño o riesgo.
 - b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
 - c) Clausura temporal, parcial o total de la actividad o instalación.
 - d) Suspensión temporal de la actividad.
2. Con la misma finalidad, el órgano competente podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y condiciones establecidas en la legislación básica sobre el procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y, demás normativa aplicable.
 3. No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia previa a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su adopción inmediata, basadas en la producción de un daño o riesgo grave para el medio ambiente o la salud humana.

Artículo 110. Obligación de reponer e indemnización.

1. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores estarán obligados a la reposición de la situación alterada por los mismos a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración actuante, que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine.
2. En los casos de daños medioambientales, el infractor quedará obligado a la reparación de los mismos, su exigencia y la forma de la reparación deberá establecerse en la resolución sancionadora. La metodología de reparación prevista la normativa sobre responsabilidad medioambiental podrá aplicarse en este supuesto. En el caso de tratarse de daños medioambientales significativos, la reparación de los mismos se realizará en los términos de la normativa sobre responsabilidad medioambiental.

Artículo 111. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

1. Si los infractores no procedieran a la reposición y reparación de los daños, o no satisficieran la indemnización de los daños y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, una vez transcurrido el plazo señalado en



el requerimiento correspondiente, se podrá acordar la imposición de multas coercitivas sucesivas o la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará, en su caso, el diez por ciento de la multa fijada por infracción cometida.

2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento de cumplimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.
3. La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales significativos, se rigen por lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad medioambiental.

Artículo 112. Prohibición de contratar.

Las empresas que hayan sido sancionadas por infracciones graves y muy graves previstas en esta Ley no podrán contratar, ni obtener subvenciones del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta no haber ejecutado las medidas correctoras pertinentes y haber satisfecho la sanción.

Artículo 113. Procedimiento sancionador.

1. En todo lo no previsto en el presente Título será aplicable lo establecido en la correspondiente Ley reguladora de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en la normativa básica estatal que regule aspectos sobre dicha materia.
2. Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento sancionador, en los términos previstos en la legislación básica, cuando el órgano competente para iniciar dicho procedimiento considere que, de acuerdo a lo previsto en esta o en otras Leyes ambientales, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.



Artículo 114. Publicidad.

1. Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves previstas en esta Ley o en aquellas contempladas en otra legislación sectorial ambiental, se harán públicas en forma sumaria en el Boletín Oficial correspondiente, en su sede electrónica y a través de los medios de comunicación social por parte por las autoridades competentes para imponer las sanciones una vez sean firmes en vía administrativa.
2. Los órganos que ejerzan la potestad sancionadora podrán acordar, cuando estimen que existen razones de interés público, la publicación, en el diario oficial correspondiente, en su sede electrónica y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves una vez sean firmes en vía administrativa.
3. En ambos casos, la publicación incluye la identidad de la persona responsable, la infracción cometida, la sanción impuesta, así como un resumen de las obligaciones de reposición e indemnización exigidas, en su caso.
4. El órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco creará un Registro de personas infractores de normas ambientales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el cual se inscribirán las personas físicas o jurídicas sancionadas, en virtud de resolución firme, por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma Vasca. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento del citado registro.

Artículo 115. Prestación ambiental sustitutoria.

1. Las sanciones consistentes en multas, una vez que adquieran firmeza en vía administrativa, podrán ser sustituidas a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora que redunde en beneficio del medio ambiente, en las condiciones y términos que determine el órgano sancionador que impuso la multa.
2. A estos efectos, la persona infractora deberá solicitar la sustitución de la sanción económica por la prestación ambiental sustitutoria de valor, como mínimo, equivalente a la cuantía de la multa. La resolución sobre la solicitud deberá ser acordada y notificada al interesado en el plazo máximo de tres meses, pudiendo entenderse desestimada en caso contrario.



3. Los plazos de prescripción de las sanciones impuestas quedarán en suspenso durante los plazos de resolución de la solicitud de prestación ambiental sustitutoria anteriormente señalados.

Artículo 116. Destino de las sanciones económicas.

1. La recaudación obtenida por las sanciones que se impongan tendrán un carácter finalista destinándose exclusivamente a la realización de los fines previstos en esta Ley y, a tal efecto, se integrará en la partida presupuestaria definida en la presente Ley.

DISPOSICION ADICIONAL

Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de acuerdo a sus competencias, se dotarán de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Procedimientos en curso.

1. Los procedimientos en curso a la entrada en vigor de la presente Ley continuarán tramitándose conforme a la normativa vigente en el momento de su iniciación, salvo que el promotor del expediente solicite de forma expresa la aplicación de los procedimientos contemplados en la presente Ley conservándose, a tal efecto, los actos y trámites ya realizados.
2. Las actividades o instalaciones titulares de autorizaciones ambientales integradas y licencias municipales de actividad clasificada seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus títulos administrativos y lo que la propia Ley establece, sin perjuicio de que hayan de adaptarse a ésta a tenor de las resoluciones que recaigan en virtud de los procedimientos correspondientes y conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda de esta Ley.



DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Instalaciones existentes.

1. Las actividades o instalaciones existentes a la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren incluidas en el anexo I apartado B) deberán adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental única previsto en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Ley de conformidad a los criterios y plazos dispuestos en esta disposición.
2. Dicha adaptación se realizará por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco sin necesidad de tramitar el procedimiento previsto en esta Ley en el supuesto de que el titular de la actividad o instalación remita una declaración responsable en la que se asegure que las condiciones en base a las cuales se emitieron sus títulos ambientales habilitantes se mantienen en términos análogos en la actualidad.
3. En los supuestos en los que las citadas actividades o instalaciones hayan llevado a cabo modificaciones no recogidas en sus títulos ambientales habilitantes, se deberá remitir una memoria descriptiva de las modificaciones realizadas respecto a los últimos títulos habilitantes concedidos para su análisis y determinación, en su caso, por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco si procede o no la adaptación prevista en el apartado anterior que no requiere de la tramitación el procedimiento. En caso de que el órgano ambiental así lo determine estas actividades deberán iniciar el procedimiento de obtención de la autorización ambiental única determinado en esta Ley.
4. La adaptación prevista en los apartados anteriores se realizará conforme a los siguientes criterios y plazos:
 - a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades e instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos peligrosos.
 - b) En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera sujetas a autorización que sean priorizadas por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 - c) En el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se habrán adaptado a la misma las actividades de tratamiento de residuos no peligrosos.



- d) En el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley deberán estar adaptadas a la misma todas las actividades e instalaciones existentes.
5. A la entrada en vigor de esta Ley, las administraciones públicas o entes públicos que hayan tramitado procedimientos sectoriales ambientales en relación a las actividades e instalaciones que deban adaptarse al nuevo régimen jurídico de autorización ambiental única deberán trasladar copia de dichos expedientes al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICION DEROGATORIA.

Queda derogada la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco.

Quedan derogadas, así mismo, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

Modificación del artículo 7.c) 6. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales.

Se modifica el artículo 7.c) 6. de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónomas y los Órganos Forales, quedando redactado de la siguiente forma:

“6.- La imposición de medidas correctoras en actividades sujetas al régimen de licencia de actividad clasificada en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y en los municipios de más 10.000 mil habitantes si así lo solicita el Ayuntamiento correspondiente, siempre que no afecte a más de un Territorio Histórico o Ente Público extracomunitario, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a los Entes municipales”.

Se modifica la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, en la forma que se indica a continuación:



Primero.- Se modifican los apartados k) y l) y se añade un nuevo apartado al artículo 7 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. La modificación de los apartados k) y l) resulta fundamental atendiendo al contenido y al carácter que tienen este tipo de informes en el ámbito intercomunitario de la CAPV, por homogeneidad de trato en todo el territorio y para evitar la desprotección de los intereses públicos que la no emisión de un informe que, por su complejidad bien puede demorarse, de no emitirse habilitaría, sin más, cualquier pretensión urbanística por desafortunada que fuera.

“Artículo 7. Funciones

Son funciones de la Agencia Vasca del Agua:

- k) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales después de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre el planeamiento municipal y la protección y utilización del dominio público hidráulico, de sus zonas de protección y de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá desfavorable si no se emite y notifica en el plazo dos meses.
- l) Informar con carácter vinculante los planes generales, normas subsidiarias, planes parciales y planes especiales antes de su aprobación inicial. Este informe versará en exclusiva sobre la relación entre las obras de interés general de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el planeamiento municipal, así como sobre la relación entre dicho planeamiento y la protección y utilización del dominio público hidráulico, de sus zonas de protección y de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, y sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes aplicables por razones sectoriales o medioambientales. Se entenderá desfavorable si no se emite y notifica en el plazo dos meses.
- a. La elaboración y remisión al Gobierno Vasco del Plan Director de Abastecimiento y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas previsto en la presente ley”.

Segundo.- Se modifican los apartados a) y e) del artículo 12 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 12. La Asamblea de Usuarios

Corresponderá a la Asamblea de Usuarios:



a) Proponer al Gobierno, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones para su aprobación o tramitación de acuerdo con sus competencias.

e) Aprobar las ordenanzas y los estatutos de las comunidades de usuarias y usuarios y regantes de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.”

Tercero.- Se modifica el apartado a) del artículo 13 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Corresponden al Consejo de Administración, entre otras, las siguientes funciones:

a) Elaborar la propuesta de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones.”

Cuarto.- Se añade un nuevo apartado al artículo 13 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“j) La aprobación inicial y remisión al Gobierno Vasco del Plan Director de Abastecimiento y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas previsto en la presente ley”.

Quinto.- Se añade un nuevo apartado al artículo 15 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“n) Proponer al Consejo de Administración el Plan Director de Abastecimiento de Agua y de Depuración de Aguas Residuales Urbanas”.

Sexto.- El artículo 22 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 22. La planificación hidrológica de Euskadi



1. La planificación hidrológica de Euskadi se realiza mediante los planes hidrológicos, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y los Planes de Sequía de las demarcaciones hidrográficas recayentes en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental y Occidental y la demarcación hidrográfica de la Cuenca del Ebro, sus respectivos programas de medidas y los planes y programas de detalle.

2. La planificación hidrológica de las Cuencas Internas de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental, competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es ejercida por la Agencia Vasca del Agua. De igual modo, la Agencia Vasca del Agua participa en la planificación que corresponde a la Administración del Estado respecto de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental y del Ebro y de las cuencas intercomunitarias de la Demarcación Cantábrico Oriental, de acuerdo con el ordenamiento jurídico en vigor.”

Séptimo.- El artículo 23 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 23. El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco

1. El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco contendrá las determinaciones exigidas por la legislación general vigente en cada momento en materia de aguas, y, además, los siguientes aspectos:

- a) Caracterización de las masas de agua y de su entorno, de las presiones antrópicas y de sus efectos sobre aquellas, del medio socioeconómico y de los sistemas actuales de abastecimiento, saneamiento y defensa ante avenidas.
- b) Evaluación de los recursos hídricos subterráneos y superficiales, de sus usos y su disponibilidad.
- c) Identificación de las necesidades actuales y futuras, bajo el prisma de una adecuada gestión de la demanda, reutilización y uso eficiente.
- d) Las directrices y propuestas de actuación para la protección y recuperación de las masas de agua y de su entorno, normas de explotación, vertido y uso.



- e) Establecimiento del balance entre recursos y demandas ante diversos horizontes, y definición de las infraestructuras básicas y actuaciones que resulten necesarias.
- f) Análisis económico del plan y de su financiación bajo la óptica del análisis coste-beneficio, incluyendo los costes ambientales, y del principio de recuperación de costes.

2. El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del País Vasco se elaborará con la participación ciudadana activa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE, y la intervención de las administraciones públicas afectadas.”

Octavo.- Se modifica el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 24. Programa de medidas

1. Para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de los programas de medidas de los planes hidrológicos, se establecerá un programa de medidas básicas con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el capítulo III de esta ley.”

Noveno.- Se modifica el nombre del título del CAPÍTULO VI de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“CAPÍTULO VI. CICLO INTEGRAL DE AGUA DE USO URBANO”

Décimo.- Se crea una sección primera en el capítulo VI de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, con los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redactan con el siguiente tenor:

“Sección 1ª. Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano

Artículo 33. Definición.

El Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano es el instrumento de planificación y coordinación territorial de actuaciones en materia de agua de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que deberán basarse las medidas de las Administraciones competentes en la materia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de mejorar la satisfacción de las demandas de agua, guiada por



criterios de sostenibilidad, ahorro y eficiencia; y de contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales en materia de Aguas.

Artículo 34. Contenido.

1. El Plan Director, teniendo en cuenta los principios a que se refiere el artículo 3 de la presente ley, tendrá el siguiente contenido mínimo:

- a) La concreción de los objetivos generales en materia de abastecimiento y saneamiento y las prioridades en su consecución.
- b) La identificación, análisis y definición de las acciones específicas a desarrollar para alcanzar los objetivos fijados en el Plan.
- c) La descripción y examen de la situación actual y de la evolución futura de las necesidades de abastecimiento y de saneamiento.
- d) La zonificación del territorio de la Comunidad Autónoma a efectos de planificación y gestión del abastecimiento y del saneamiento.
- e) La concreción de las actuaciones de abastecimiento y saneamiento previstas, incluyendo las medidas relacionadas con aspectos relativos a la gestión, tales como la organización territorial de sistemas y servicios, gestión de la demanda y mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento y la gestión de pluviales; las nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento; y las mejoras o adaptaciones de las existentes, con indicación tanto de las que sean de competencia estatal, de competencia o de interés de la Comunidad Autónoma o de competencia municipal.
- f) Análisis y programación de las inversiones de la Comunidad Autónoma necesarias para la ejecución de las actuaciones previstas por el Plan Director durante el período de su vigencia.

2. Igualmente, el Plan Director podrá incluir cuantas determinaciones sean precisas a los efectos de la realización de los objetivos previstos en esta ley.

Artículo 35. Procedimiento de elaboración, aprobación y revisión.

1. La propuesta inicial del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano será redactada por la Dirección de URA- Agencia Vasca del Agua.
2. Dicha propuesta se elevará al Consejo de Administración para su aprobación inicial, y posterior remisión al Gobierno Vasco.
3. El Plan Director será revisado, al menos, cada cinco años, siguiéndose el procedimiento indicado en los párrafos anteriores”.



Decimoprimer.- Se crea una sección segunda en el capítulo VI de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor: (Se modifica la denominación de los artículos 33, 34 y 35, que pasan a 33 bis, 34 bis, y 35 bis respectivamente. Los artículos 34 y 35 de la vigente Ley se unifican, y modifican, en el 34 bis. Se crea un nuevo artículo 33 tris.

“Sección 2ª. Normas generales del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano y riego

Decimosegundo.- Se añade un nuevo artículo 33 tris con el siguiente contenido:

Artículo 33 tris.-Reglamento marco del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano

1. El Gobierno Vasco dictará, a propuesta de URA Agencia Vasca del Agua, el Reglamento Marco Regulador del Ciclo Urbano de Agua de Uso Urbano, que será aprobado por Decreto de Consejo de Gobierno.
2. El Reglamento deberá prever el desarrollo del siguiente contenido mínimo:
 - a) Definición del régimen de prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento.
 - b) Mapa de servicios de abastecimiento y saneamiento de agua prestados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 - c) Garantía de calidad y eficiencia en la prestación del servicio.
 - d) Auxilio y financiación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.
 - e) Régimen de transmisión de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento.
 - f) Recuperación de los costes del agua y mecanismos de reporte.
 - g) Y cualesquiera otros previstos en esta ley.

Artículo 34 bis. Ordenanzas locales reguladoras del ciclo integral de agua de uso urbano

El régimen jurídico del servicio del ciclo integral de agua de uso urbano se regulará mediante la correspondiente ordenanza local. Las ordenanzas deberán, de acuerdo con el reglamento marco regulador del servicio que a estos efectos dicte el Gobierno Vasco a propuesta de la Agencia Vasca del Agua, regular las siguientes cuestiones:



- a) Régimen de prestación del servicio, los supuestos de suspensión de la prestación y el abastecimiento en situaciones de emergencia.
- b) Red pública de tomas de agua.
- c) Requisitos de las instalaciones de agua de los edificios.
- d) Características del régimen de contratación.
- e) Régimen de implantación y funcionamiento de los mecanismos de medición directa del consumo efectivo en alta y baja.
- f) La protección de las instalaciones e infraestructuras necesarias para la prestación del servicio.
- g) Determinación de los vertidos prohibidos y tolerados a las redes municipales de alcantarillado y colectores, así como de los tratamientos previos exigibles antes de su realización.
- h) Características físicas, forma de realización y requisitos administrativos que deben cumplir los vertidos de naturaleza no doméstica que se realicen a la red de saneamiento.
- i) Régimen de los vertidos accidentales potencialmente peligrosos: obligaciones de sus responsables, medidas de minoración de sus consecuencias, y valoración y formas de recuperación de los daños a personas y bienes.
- j) Régimen de vertidos mediante camiones cisterna.
- k) Régimen de inspección, muestreo, análisis y control de los vertidos, incluyendo formas que permitan la actuación de la Administración en todo momento.
- l) Plazo y alcance de la obligación de adaptación de las ordenanzas reguladoras del vertido a las determinaciones del reglamento marco referido en el párrafo primero de este artículo.
- m) Establecimiento de las tarifas de prestación del servicio para garantizar el principio de recuperación de costes.

Artículo 37. Funciones de la Agencia Vasca del Agua

1.- Las instalaciones del ciclo integral de agua de uso urbano, con independencia de su titularidad y gestión, están sujetas al control y supervisión de la Agencia Vasca del Agua, la cual, en el ámbito de las competencias que legalmente le corresponden, tiene atribuidas las funciones siguientes:

- a) Ejercer la policía de abastecimiento, que comporta el derecho de acceso e inspección de las instalaciones y el correspondiente deber de su titular a facilitarlos.
- b) Ordenar la sustitución de caudales por otros de diferente origen, de acuerdo con la planificación hidrológica.



- c) Ordenar medidas de carácter temporal en casos de sequía extraordinaria u otros estados de necesidad que requieran de forma urgente la disponibilidad de agua.
- d) En general, elaborar planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, con el fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial.
- e) Autorizar el vertido de dichas aguas al medio receptor y, en su caso, la reutilización de sus efluentes.
- f) Ejercer la inspección y control que la normativa general en materia de aguas atribuye a los organismos de cuenca.
- g) Elaborar y proponer al Gobierno Vasco, para su aprobación mediante decreto, el reglamento marco del ciclo de agua de uso urbano, que será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y al cual las administraciones gestoras de las instalaciones deberán adaptar sus correspondientes ordenanzas y reglamentos.
- h) La Agencia Vasca del Agua podrá intervenir, por razones de interés público y con carácter temporal, instalaciones públicas o privadas de depuración de aguas residuales cuando no sea procedente la paralización de las actividades que producen el vertido y se deriven de él graves inconvenientes. En estos supuestos, la Agencia Vasca del Agua reclamará del titular de las instalaciones:
 - 1) Las inversiones necesarias para modificar o acondicionar las instalaciones en los términos previstos en la autorización de vertido o, si no la hubiera, que hagan posible su otorgamiento.
 - 2) Los gastos de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones por el tiempo que se prolongue la intervención de éstas.

2.- Igualmente, corresponde a la Agencia Vasca del Agua, en relación con las instalaciones de riego y con independencia de su titularidad y gestión, en el ámbito de sus competencias:

- a) Ejercer la policía de riego, que comporta el derecho de acceso e inspección de las instalaciones y el correspondiente deber de su titular a facilitarlos.
- b) Ordenar la sustitución de caudales por otros de diferente origen, de acuerdo con la planificación hidrológica.



- c) Ordenar medidas de carácter temporal en casos de sequía extraordinaria u otros estados de necesidad que requieran de forma urgente la disponibilidad de agua.
- d) Elaborar y proponer al Gobierno Vasco, para su aprobación mediante decreto, el reglamento marco de riego.
- e) En general, elaborar planes, programas y acciones que tengan como objetivo una adecuada gestión de las demandas, con el fin de promover el ahorro y la eficiencia económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones de la correspondiente planificación sectorial.”

Decimotercero.- Se modifica el artículo 40 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, con el siguiente tenor:

“Artículo 40.-Régimen jurídico de las obras hidráulicas.

Las obras públicas hidráulicas previstas en la planificación hidrológica y en el Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano no estarán sujetas a licencia municipal si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, y tampoco estarán sujetas a licencia las obras hidráulicas que tengan carácter o interés supramunicipal. Las entidades locales informarán y serán informadas de los proyectos de obras hidráulicas que afecten a su territorio de forma previa a su ejecución”.

Decimocuarto.- Se modifica el apartado 1 del artículo 45 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 45. Hecho imponible

- 1. Constituye el hecho imponible la detracción del agua en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos establecidos en la presente ley, por la afección al medio que su utilización pudiera producir.”

Decimoquinto.- Se modifica el apartado 1 del artículo 58 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, que se redacta con el siguiente tenor:

“Artículo 58. Sanciones

- 1. Por las infracciones cometidas contra el régimen legal del dominio público hidráulico del ámbito de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma del



País Vasco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental podrán imponerse las siguientes sanciones:

(...) ”

Decimosexto.- Se elimina la disposición adicional primera dado que la modificación propuesta en el artículo 22, la hace innecesaria.

Decimoséptimo.- La disposición adicional segunda de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, pasa a ser la disposición adicional primera.

Decimooctavo.- La disposición adicional tercera de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, pasa a ser la disposición adicional segunda.

Decimonoveno.- La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, pasa a ser la disposición adicional tercera.

Vigésimo.- La disposición adicional quinta de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, pasa a ser la disposición adicional cuarta.

Vigésimo primero.- La disposición adicional sexta de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, pasa a ser la disposición adicional quinta.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

Adecuación al régimen establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

1. El procedimiento previsto en la presente Ley para la autorización de los vertidos realizados por las actividades contempladas en los anexos I.A y I.B al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Administración General del Estado no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.
2. El organismo de cuenca correspondiente liquidará el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de aquél por el órgano autonómico competente para otorgarla.



DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.

Adecuación al régimen establecido en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.

1. El procedimiento previsto en la presente Ley para la autorización de los vertidos realizados por las actividades contempladas en los anexos I.A y I.B al dominio público hidráulico de las cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco y los vertidos de tierra al mar no modifica el régimen económico financiero previsto por la legislación de aguas ni el resto de competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Agencia Vasca del Agua-URA en materia de protección del dominio público hidráulico. En particular, no se alteran las competencias relativas a vigilancia e inspección ni la potestad sancionadora.
2. la Agencia Vasca del Agua-URA liquidará el canon de control de vertidos de acuerdo con las condiciones contenidas en la autorización ambiental integrada y la autorización ambiental única que, a estos efectos, deberá ser puesta a disposición de la Agencia por el órgano autonómico competente para otorgarla.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.

Modificación de Anexos.

Se faculta a la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que, mediante Decreto y a solicitud del Departamento competente en materia de medio ambiente, pueda modificar los anexos de esta Ley con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de carácter técnico que en su caso sean necesarios.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ANEXOS

Anexo I.A Instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada.

1. Instalaciones de combustión.



- 1.1 Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:
 - a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
 - b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
- 1.2 Refinerías de petróleo y gas:
 - a) Instalaciones para el refinado de petróleo o de crudo de petróleo.
 - b) Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.
- 1.3 Coquerías.
- 1.4 Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
 - a) Carbón;
 - b) Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 MW.
- 2. Producción y transformación de metales.**
 - 2.1 Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.
 - 2.2 Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
 - 2.3 Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
 - a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
 - b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
 - c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de acero bruto por hora.
 - 2.4 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
 - 2.5 Instalaciones:



- a) Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
 - b) Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
- 2.6 Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m³.
- 3. Industrias minerales.**
- 3.1 Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
- a) i) fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias;
 - ii) fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día;
 - b) producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias;
 - c) producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias.
- 3.2 Sin contenido.
- 3.3 Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.
- 3.4 Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
- 3.5 Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 m³ y más de 300 kg/m³ de densidad de carga por horno.
- 4. Industrias químicas.**
- A efectos de la presente sección y de la descripción de las categorías de actividades incluidas en la misma, fabricación, significa la fabricación a



escala industrial, mediante transformación química o biológica de los productos o grupos de productos mencionados en los puntos 4.1 a 4.6.

- 4.1 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular:
- a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
 - b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
 - c) Hidrocarburos sulfurados.
 - d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
 - e) Hidrocarburos fosforados.
 - f) Hidrocarburos halogenados.
 - g) Compuestos orgánicos metálicos.
 - h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
 - i) Cauchos sintéticos.
 - j) Colorantes y pigmentos.
 - k) Tensioactivos y agentes de superficie.
- 4.2 Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos como:
- a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
 - b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
 - c) Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.



- d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
 - e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.
- 4.3 Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
- 4.4 Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o de biocidas.
- 4.5 Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios.
- 4.6 Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
- 5. Gestión de residuos.**
- 5.1 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:
- a) Tratamiento biológico;
 - b) Tratamiento físico-químico;
 - c) Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
 - d) Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2;
 - e) Recuperación o regeneración de disolventes;
 - f) Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;
 - g) Regeneración de ácidos o de bases;
 - h) Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación;
 - i) Valorización de componentes procedentes de catalizadores;
 - j) Regeneración o reutilización de aceites;
 - k) Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
- 5.2 Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o co-incineración de residuos:



- a) Para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;
 - b) Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
- 5.3 Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
- a) Tratamiento biológico;
 - b) Tratamiento físico-químico;
 - c) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
 - d) Tratamiento de escorias y cenizas;
 - e) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
- 5.4 Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:
- a) Tratamiento biológico;
 - b) Tratamiento previo a la incineración o coincineración;
 - c) Tratamiento de escorias y cenizas;
 - d) Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes.
- Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.
- 5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.
- 5.6 Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos



mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7, con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.

5.7 Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas.

6. Industria derivada de la madera.

6.1 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:

- a) Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas;
- b) Papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.

6.2 Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

6.3 Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados, tableros de cartón comprimido o tableros de fibras, con una capacidad de producción superior a 600 m³ diarios.

7. Industria textil.

7.1 Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

8. Industria del cuero.

8.1 Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.

9. Industria agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

9.1 Instalaciones para:

- a) Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.
- b) Tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de:
 - i) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche) de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día;
 - ii) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas por día o 600



toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días consecutivos en un año cualquiera;

iii) solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:

- 75 si A es igual o superior a 10, o
- $[300 - (22,5 \times A)]$ en cualquier otro caso,

donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso) de la capacidad de producción de productos acabados.

El envase no se incluirá en el peso final del producto.

La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.

c) Tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).

9.2 Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

9.3 Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:

- a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.
- b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
- c) 750 plazas para cerdas reproductoras.

10. Consumo de disolventes orgánicos.

10.1 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlazarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

11. Industria del carbono.



11.1 Instalaciones para fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.

12. Industria de conservación de la madera.

12.1 Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una capacidad de producción superior a 75 m³ diarios. Se excluye el tratamiento para combatir las alteraciones cromógenas exclusivamente.

13. Tratamiento de aguas.

13.1 Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada en el presente anejo.

14. Captura de CO₂.

14.1 Captura de flujos de CO₂ procedentes de instalaciones incluidas en el presente anejo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.



Anexo.I.B. Instalaciones sometidas a autorización ambiental única.

Siempre que se trate de actividades no incluidas en el apartado A de este anexo I, se someterán a autorización ambiental única, las siguientes actividades e instalaciones:

1. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de Residuos peligrosos.
2. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de Residuos no peligrosos.
3. Actividades o instalaciones sujetas a autorización como potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
4. Actividades o instalaciones que generen gases de efecto invernadero y que de conformidad con la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero deberá contar con autorización de emisión.
5. Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y expresa de la Agencia Vasca del Agua\URA por realizar vertidos industriales directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líquidos, sólidos o de cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre.
6. Actividades o instalaciones que requieran autorización administrativa previa y expresa del organismo de cuenca por realizar vertidos industriales directos o indirectos de aguas y de productos residuales, líquidos, sólidos o de cualquier naturaleza en las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.
7. Otras actividades que, a criterio del órgano ambiental de la CAPV, puedan tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.



Anexo.I.C. Actividades e instalaciones sometidas a licencia de actividad clasificada.

Siempre que se trate de actividades no incluidas en los apartados A, B y D de este anexo I, se someterán a licencia municipal de actividad clasificada, las siguientes actividades e instalaciones:

1. Actividades extractivas.
2. Instalaciones nucleares y radiactivas.
3. Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 kW.
4. Industrias en general.
5. Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares, así como mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares.
6. Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y/o la superficie específicamente destinada a la producción supere los 300 m².
7. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos.
8. Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de combustibles líquidos o gaseosos.
9. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros.
10. Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m³ cuya ejecución se prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal.
11. Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable.
12. Piscifactorías.
13. Mataderos.
14. Los establecimientos destinados a salas de fiestas, discotecas, discotecas de juventud, disco-bares, karaokes, bares especiales, pubs o similares, así como las plazas de toros permanentes.



15. Otros establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:
 - disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.
 - disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios.
 - disponer de algún recinto catalogado de riesgo especial alto de acuerdo con la normativa técnica en vigor.
 - que se trate de edificios de valor cultural cuyas características arquitectónicas no permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas con carácter general.
 - que se trate de establecimientos de régimen especial conforme a la normativa de espectáculos y actividades recreativas.
16. Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de ganado mayor) o explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo urbano industrial.
17. Actividades ganaderas domésticas, entendiéndose por tales las instalaciones de más de 4 UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial.
18. Otras actividades que, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, puedan tener efectos análogos sobre el medio ambiente y la salud.



Anexo. I.D. Instalaciones y actividades sometidas a comunicación previa de actividad clasificada.

1. Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW.
2. Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea inferior a 25 kW y/o la superficie específicamente destinada a la producción no supere los 300 m², salvo los talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares, que en todo caso se entienden sujetos a licencia municipal de actividad clasificada.
3. Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición de productos y materiales no incluidas en el punto 7 del anexo anterior.
4. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una estación de servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga.
5. Guarderías para vehículos.
6. Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, centros sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros de seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias.
7. Hoteles y residencias comunitarias, residencias de personas mayores, casas de huéspedes y establecimientos similares.
8. Establecimientos de espectáculos públicos o actividades recreativas que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada previa.
9. Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en el anexo en el que se prevén las instalaciones y actividades sujetas a licencia municipal de actividad clasificada
10. Centros de transformación.
11. Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, banco de datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o informático de la información, estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de control de alarmas) y similares.



12. Instalaciones complementarias:
 - 12.1. Sala de calderas.
 - 12.2. Instalaciones de aire acondicionado.
 - 12.3. Instalaciones de cámaras frigoríficas.
 - 12.4. Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiéndose por tales los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la reglamentación que resulte de aplicación.
13. Cementerios y tanatorios sin crematorio.
14. Otras actividades que puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.



Anexo.II.A. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno:

1. Directrices de ordenación del territorio.
2. Planes Territoriales Parciales.
3. Planes Territoriales Sectoriales.
4. Planes Generales de Ordenación Urbana.
5. Planes de Sectorización.
6. Otros planes y programas cuando sean el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o al uso del suelo.
7. Otros planes y programas cuando, de forma directa o indirecta, sólo o en combinación con otros planes, programas o proyectos, puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No será necesaria la evaluación ambiental de los planes y programas que únicamente establezcan disposiciones para la gestión del lugar, salvo que se encuentren en alguno de los demás supuestos de este Anexo IIA.
8. Otros planes y programas recogidos en el Anexo IIB, cuando así lo decida el órgano ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, o bien, a solicitud del promotor.



Anexo. II.B. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.

1. Las modificaciones menores (los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia) de los planes y programas recogidos en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013.
2. Los planes y programas recogidos en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013 que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
3. Otros planes y programas que no se encuentran recogidos en el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 21/2013 cuando establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos que no se encuentren sometidos a evaluación de impacto ambiental.



Anexo. II.C. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

1. Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los Grupos que forman parte de este Anexo IIC, así como los proyectos que, encontrándose fraccionados, alcancen los umbrales recogidos en dichos apartados, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados individualmente.
2. Los proyectos que se ajusten a las especificaciones recogidas en los Grupos de este Anexo IIC cuando sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y cuya utilización esté prevista para un plazo igual o superior a dos años.
3. Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado o ejecutado, cuando, por sí sola o por acumulación con otras modificaciones del mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los Grupos de este Anexo IIC.
4. Otros proyectos recogidos en el Anexo IID, cuando así lo decida el órgano ambiental tras haber sustanciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, o bien, a solicitud del promotor.

Grupo 1. Ganadería.

- a) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
 - 1º 40.000 plazas para gallinas.
 - 2º 55.000 plazas para pollos.
 - 3º 2.000 plazas para cerdos de engorde.
 - 4º 750 plazas para cerdas de cría.

Grupo 2. Industria extractiva.

- a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:



1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha.
 2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos anuales.
 3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel de referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos.
 4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha.
 5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos.
 6. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.
 7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
- b) Minería subterránea en las explotaciones en las que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
- 1º Que su paragénesis pueda, por oxidación, hidratación o disolución, producir aguas ácidas o alcalinas que den lugar a cambios en el pH o liberen iones metálicos o no metálicos que supongan una alteración del medio natural.
 - 2º Que exploten minerales radiactivos.
 - 3º Aquéllas cuyos minados se encuentren a menos de 1 km (medido en plano) de distancia de núcleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.



- c) Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando:
- 1º La cantidad de producción sea superior a 500 toneladas por día en el caso del petróleo y de 500.000 metros cúbicos por día en el caso del gas o bien,
 - 2º Se realicen en medio marino.
- d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO₂, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.
- No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de facturación hidráulica.

En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.

Grupo 3. Industria energética.

- a) Refinerías de petróleo bruto (con la exclusión de las empresas que produzcan únicamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de, al menos, 500 t de carbón o de pizarra bituminosa al día.
- b) Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica de, al menos, 300 MW.
- c) Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles), cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua.
- d) Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
- e) Instalaciones diseñadas para:
 - 1º La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
 - 2º El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta radiactividad.
 - 3º El depósito final del combustible nuclear gastado.



- 4º Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
- 5º Exclusivamente el almacenamiento (proyectado para un período superior a diez años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del de producción.
- f) Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para el transporte de:
 - 1º gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión,
 - 2º flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
- g) Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
- h) Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o químicos con una capacidad de, al menos, 200.000 t.
- i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.
- j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.

Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.

- a) Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
- b) Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.
- c) Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes actividades:
 - 1º Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 t de acero en bruto por hora.



- 2º Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kJ por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
 - 3º Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 t de acero bruto por hora.
- d) Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 t por día.
 - e) Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el cadmio o 20 t para todos los demás metales, por día.
 - f) Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 metros cúbicos.
 - g) Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos, con capacidad superior a 5.000 t por año de mineral procesado.
 - h) Producción de cemento, cal y óxido de magnesio:
 - 1º Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 t diarias.
 - 2º Fabricación de clínker en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 t diarias, o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 t por día.
 - 3º Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t diarias.
 - 4º Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t diarias.
 - i) Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 t por día.
 - j) Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t por día.
 - k) Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 t por día y



una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.

Grupo 5. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

- a) Instalaciones para la producción a escala industrial de sustancias mediante transformación química o biológica, de los productos o grupos de productos siguientes:

1º Productos químicos orgánicos:

Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).

Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.

Hidrocarburos sulfurados.

Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.

Hidrocarburos fosforados.

Hidrocarburos halogenados.

Compuestos orgánicos metálicos.

Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).

Cauchos sintéticos.

Colorantes y pigmentos.

Tensioactivos y agentes de superficie.

2º Productos químicos inorgánicos:

Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.

Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.

Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.



Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.

No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.

- 3º Fertilizantes a base de fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes simples o compuestos).
 - 4º Productos fitosanitarios y de biocidas.
 - 5º Productos farmacéuticos mediante un proceso químico o biológico.
 - 6º Productos explosivos.
- b) Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 t diarias.
- Las plantas para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 t de productos acabados por día.
- c) Plantas industriales para:
- 1º La producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas similares.
 - 2º La producción de papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 200 t diarias.
- d) Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 t diarias.

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

- a) Carreteras:
- 1º Construcción de autopistas y autovías.
 - 2º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.
- b) Ferrocarriles:
- 1º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.
 - 2º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más de 10 km.



- c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.
- d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t.
- e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
- f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

- a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos.
- b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos.
- c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:
 - 1º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año.
 - 2º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.
- d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.



- a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011).
- b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento físico-químico (como se define el epígrafe D9 del anexo I de la Ley 22/2011), con una capacidad superior a 100 t diarias.
- c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 t por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 t, excluidos los vertederos de residuos inertes.

Grupo 9. Otros proyectos.

- a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
 - 1º Instalaciones de vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, así como de residuos inertes o materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino que ocupen más de 1 ha de superficie.
 - 2º Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola o aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha.
 - 3º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha.
 - 4º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales.
 - 5º Tuberías para el transporte de productos químicos y para el transporte de gas y petróleo, con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km en los espacios a los que se refiere el apartado a) y tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.
 - 6º Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios naturales considerados en este artículo con



- una longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.
- 7º Parques eólicos que tengan más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia.
 - 8º Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
 - 9º Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros.
 - 10º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha; Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.
 - 11º Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
 - 12º Parques temáticos.
 - 13º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
 - 14º Concentraciones parcelarias que conlleven cambio de uso del suelo cuando suponga una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
 - 15º Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa complementaria.
 - 16º Construcción de autopistas, autovías y carreteras convencionales de nuevo trazado.
 - 17º Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.
 - 18º Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha.
- b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 ha.



- c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- d) Instalaciones para la captura de flujos de CO₂ con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO₂ sea igual o superior a 1,5 Mt.



Anexo. II.D. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada.

Con exclusión de todos los proyectos recogidos en el Anexo IIC, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes proyectos:

- 1º Los proyectos que se encuentren en alguno de los supuestos recogidos en los Grupos que forman parte de este Anexo IID, así como los proyectos que, encontrándose fraccionados, alcancen los umbrales recogidos en dichos apartados, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados individualmente.
- 2º Los proyectos de este Anexo IID que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos; los proyectos similares del Anexo IIC cuya utilización esté prevista para un plazo inferior a dos años.
- 3º Otros proyectos cuando, de forma directa o indirecta, sólo o en combinación con otros planes, programas o proyectos, puedan afectar de forma apreciable a alguno de los espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- 4º Cualquier modificación de un proyecto, ya autorizado, aprobado o ejecutado, cuando, por sí solo o por acumulación con otras modificaciones del mismo proyecto, alcance los umbrales recogidos en alguno de los Grupos de este Anexo IID o cuando suponga:
 - Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
 - Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
 - Un incremento significativo en la generación de residuos.
 - Un incremento significativo en la utilización de los recursos naturales.
 - Una afección a espacios protegidos o que gocen de un régimen de protección, recogidos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y en los artículos 30, 42 y 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



- Una afección significativa al patrimonio cultural.

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

- a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
- b) Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.
- c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura:
 - 1º Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
 - 2º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
- d) Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.
- e) Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción superior a 500 t al año.
- f) Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades:
 - 1º 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
 - 2º 300 plazas para ganado vacuno de leche.
 - 3º 600 plazas para vacuno de cebo.
 - 4º 20.000 plazas para conejos.

Grupo 2. Industrias de productos alimenticios.

- a) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
 - 1º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
 - 2º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 - 3º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.



- b) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, tenga una capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales), e instalaciones cuando cuya materia prima sea vegetal tenga una capacidad de producción superior a 300 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales); O bien se emplee tanto materia prima animal como vegetal y tenga una capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
- c) Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t por día (valor medio anual).
- d) Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
- 1º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
 - 2º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 - 3º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
- e) Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
- 1º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
 - 2º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 - 3º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
- f) Instalaciones para el sacrificio, despiece o descuartizamiento de animales con una capacidad de producción de canales superior a 50 t por día.
- g) Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
- 1º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
 - 2º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
 - 3º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.
- h) Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado, siempre que en la instalación se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
- 1º Que esté situada fuera de polígonos industriales.
 - 2º Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.



3º Que ocupe una superficie de, al menos, 1 ha.

- h) Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 t diarias.

Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales.

- a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafía de los suelos y subsuelo, en particular:
- 1º Perforaciones geotérmicas de más de 500 metros.
 - 2º Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.
 - 3º Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
 - 4º Perforaciones petrolíferas o gasísticas de exploración o investigación.
- b) Instalaciones en el exterior y en el interior para la gasificación del carbón y pizarras bituminosas no incluidas en el anexo anterior.
- c) Exploración mediante sísmica marina.
- d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
- e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios cuando el volumen del producto extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos anuales.
- f) Instalaciones para la captura de flujos de CO₂ con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones no incluidas en el anexo anterior.
- g) Explotaciones de áridos (no incluidas en el anexo anterior) que se hallen ubicadas en:
- 1º terreno de dominio público hidráulico para extracciones superiores a 20.000 metros cúbicos anuales; o
 - 2º zona de policía de cauces y su superficie sea mayor de 5 ha.
- h) Explotaciones a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- i) Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas (proyectos no incluidos en el anexo I).



Grupo 4. Industria energética.

- a) Instalaciones industriales para:
 - 1º la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el anexo I) con potencia instalada igual o superior a 100 MW.
- b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo anterior) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
- c) Fabricación industrial de briquetas de hulla y de lignito.
- d) Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
- e) Instalaciones para el transporte de vapor y agua caliente, de oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 km y tuberías para el transporte de flujos de CO₂ con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- f) Instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos (que no estén incluidas en el anexo anterior).
- g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía. (Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia total.
- h) Instalaciones para la producción de energía en medio marino.
- i) Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha.
- j) Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 t.
- k) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
- l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo anterior.
- m) Instalaciones para la producción de lingotes de hierro o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua con una capacidad de más de 2,5 t por hora.

Grupo 5. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.

- a) Hornos de coque (destilación seca del carbón).



- b) Instalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales.
- c) Astilleros.
- d) Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves.
- e) Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
- f) Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.
- g) Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

Grupo 6. Industria química, petroquímica, textil y papelera.

- a) Instalaciones industriales de tratamiento de productos intermedios y producción de productos químicos.
- b) Instalaciones industriales para la producción de pesticidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastómeros y peróxidos.
- c) Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- d) Instalaciones industriales para la fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
- e) Instalaciones industriales para la producción de papel y cartón (proyectos no incluidos en el anexo anterior).

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

- a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales.
- b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha.
- c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley.
- e) Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a:
 - 1º uso sanitario y de emergencia, o



2º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- d) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones.
- f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
- g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo anterior).
- h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.
- i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo anterior.
- j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 km.

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

- a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el anexo anterior) cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro cúbico e inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales.
- b) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5 hectómetros cúbicos anuales y que no estén incluidos en el anexo anterior.
- c) Se exceptúan los proyectos para el trasvase de agua de consumo humano por tubería y los proyectos para la reutilización directa de aguas depuradas.
- d) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
- e) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.



- f) Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cúbicos al día.
- g) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- h) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
 - 1º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I.
 - 2º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.

Grupo 9. Otros proyectos.

- a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.
- b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
- c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha.
- d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.
- e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
- f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
- g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
- h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo anterior).



- i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad mínima de 500 huéspedes.
- j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo anterior).
- k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco hectáreas.
- l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo urbanizado y construcciones asociadas.
- m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 ha.

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- a) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
- b) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio.
- c) Cualquier proyecto no contemplado en el presente anexo II que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha.



Anexo. II.E. Criterios para determinar cuándo un proyecto sometido a evaluación ambiental simplificada debe someterse a evaluación ordinaria.

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
 - a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
 - b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.
 - c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.
 - d) La generación de residuos.
 - e) La contaminación y otras perturbaciones.
 - f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.
 - g) Los riesgos para la salud humana (por ejemplo debido a la contaminación del agua, del aire, o la contaminación electromagnética).
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas, que puedan verse afectadas por los proyectos, deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
 - a) El uso presente y aprobado del suelo.
 - b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).
 - c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:
 - 1º Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos.
 - 2º Zonas costeras y medio marino.
 - 3º Áreas de montaña y de bosque.
 - 4º Reservas naturales y parques.
 - 5º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000.
 - 6º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación comunitaria, y pertinentes para el proyecto, o en las que se considere que se ha



producido un incumplimiento de dichas normas de calidad medioambientales.

7º Áreas de gran densidad demográfica.

8º Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

9º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.

10º Masas de agua superficiales y subterráneas contemplados en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.d), teniendo en cuenta:
- a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada).
 - b) La naturaleza del impacto.
 - c) El carácter transfronterizo del impacto.
 - d) La intensidad y complejidad del impacto.
 - e) La probabilidad del impacto.
 - f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto.
 - g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados.